

“Filigrana” legislativa.

**El debate en torno a la reelección presidencial
en 1887.**

Alfredo Rodríguez Espinosa



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

*In Memoriam María Guadalupe Rodríguez López,
Rosa Rodríguez López. (Rosa Resendiz Rodríguez).*

A María Juana Espinosa de Rodríguez y a José Alfredo Rodríguez López, mis padres, su franco e incondicional apoyo fue fundamental para lograr concluir la licenciatura.

Agradecimientos.

Deseo agradecer el apoyo de la doctora Marisa Pérez de Sarmiento, quien a lo largo de varios meses dio seguimiento a este proyecto de investigación, su ayuda y enseñanzas fueron primordiales para el buen término de esta empresa.

Quiero dejar testimonio de mi gratitud a los doctores María Eugenia Ponce Alcocer, Mario Ramírez Rancaño, a los maestros Leonardo Lomelí Vanegas, Ruben Ruiz Guerra, por su tiempo, comentarios y sugerencias dedicados a este trabajo.

Por último debo especial mención a muchas personas que en las diferentes etapas del proceso representaron un apoyo y me dieron ánimos de concluir este proyecto: Miguel Ángel Rodríguez Espinosa, Marco Antonio Rodríguez Espinosa, Ulises Espinosa Romo, Montserrat Mendoza Rodríguez, María Luisa Rodríguez López, Miguel Ángel Brito Zurita, Jacqueline Romero Yescas, Omar Jasso Rivas, Socorro Reyes Simón, Alejandro Godínez del Razo.

Índice.

Introducción	2
I. La Constitución de 1857 y la legislación electoral.	6
II. Los Planes de la Noria de Tuxtepec y la Reforma de Palo Blanco.	28
III. Entre la prórroga y la Reelección.	49
IV. La discusión en la Cámara.	77
V. Consideraciones finales.	116
Apéndice.	119
Fuentes y bibliografía.	127

Introducción.

El único período de nuestra historia bautizado con el nombre de su principal protagonista, el porfiriato, de unas décadas a la fecha ha constituido un atrayente imán para investigadores tanto nacionales como extranjeros. Actualmente existen varios estudios sobre el prolongado período de gestión presidencial del general Porfirio Díaz, que lo examinan desde variadas perspectivas, lo que nos permite conocer las diferentes aristas de esa época fundacional del Estado mexicano.

Ciertamente, es importante señalar que gran parte de la bibliografía producida sobre el período porfirista que conocemos se centra en destacar la atención de los procesos sociales, políticos y económicos, pero en su aspecto general, perdiéndose de vista en ocasiones procesos más específicos que resultan de importancia para una comprensión más matizada del período.

El trabajo que el lector tiene ahora entre manos analiza un aspecto de la historia del porfirismo que aun no está lo suficientemente investigado, como es la historia institucional y legislativa del régimen encabezado por el general Díaz. En este estudio se busca devolverle su valor como testimonio valioso de la vida política porfiriana, a la vida legislativa nacional, en contra de la idea que aun prevalece entre nosotros, de que la Cámara de diputados era un recinto donde la actividad política permanecía estática.

Siguiendo la lógica de que “en México no se movía una hoja de un árbol si don Porfirio no lo ordenaba”, por muchos años se ha creído que la vida política en el recinto legislativo, prácticamente no existía, y que solo obedecían de una manera mecánica lo que desde Palacio Nacional o Chapultepec se dictaba. Por lo tanto, muchos de los autores que llegan a tratar el tema de los debates legislativos, los tocan de una manera muy somera, y en ocasiones, hasta los llegan a calificar de “cursis” e irrelevantes, como es el caso de Daniel Cosío Villegas.

El hilo conductor de este trabajo es el estudio del debate en la Cámara de Diputados, durante la XIII legislatura, que se suscitó a propósito de la propuesta de reforma constitucional de los artículos 78 y 109, para permitir la reelección, por una sola vez, del presidente de la República y los gobernadores de los estados. Creemos que el análisis de esta política institucional es importante, ya que los procesos legislativos realizados sin interrupción durante el período, coadyuvaron a dotar de una notable estabilidad al régimen porfirista, dentro del marco político autoritario.

El corte temporal abarca el mes en que se llevó a cabo la citada discusión en la Cámara de Diputados, que fue abril de 1887, de esta manera se ha podido profundizar con mayor detalle en las características del debate político, así como en la capacidad oratoria y de discusión que tenían los tribunos de aquella época. El acercamiento a las fuentes permitió reconstruir y conocer de una mejor manera como eran los procesos legislativos en la Cámara de diputados. Se consultaron el

Diario de los debates de la XIII legislatura, así como los diarios capitalinos *El siglo XIX* y *El Monitor republicano*, que se encuentran en la Hemeroteca Nacional.

Lo recopilado en concreto de las fuentes disponibles, permitieron perfilar tres hipótesis centrales: que la vida en la Cámara de diputados existía, que había discusión, y además de gran altura y erudición; que no es tan exacta la percepción de que las propuestas eran aprobadas de una forma automática y sin debate; y por último, que los legisladores de la época porfirista tenían una gran capacidad para “hilar” muy fino, y realizaron un verdadero trabajo de orfebrería política, que al final dio como resultado una obra de “filigrana legislativa”.

La tesis se divide en cuatro capítulos, ordenados de manera que se entienda como la figura de la reelección presidencial viene transitando desde el liberalismo constitucional de 1857, hasta el año de 1887. El primero aborda de una manera general la Constitución de 1857, haciendo una revisión de sus principales enunciados y el debate que generaron en el Congreso Constituyente de ese año, haciendo especial énfasis en el apartado que hace referencia a la organización del Poder Ejecutivo. El segundo capítulo se ocupa de la proclamación de los planes porfiristas revolucionarios de La Noria y Tuxtepec, y de que manera dichos planes se manifestaban en relación a la reelección presidencial.

El tercer capítulo trata de las primeras manifestaciones que empezaron a surgir en el ámbito político para prolongar la estadía del general Porfirio Díaz en la

silla presidencial, y de que manera se fueron articulando y refinando las estrategias para conseguirlo. El cuarto capítulo se centra en analizar el debate que se generó a raíz de la propuesta de reforma constitucional de los artículos 78 y 109, en la Cámara de diputados, para permitir, por una sola ocasión, la reelección presidencial del Jefe del Ejecutivo y de los gobernadores de los estados.

Los temas abordados en este estudio, como son la vida política legislativa, la altura de los debates, la personalidad de los diputados, son eslabones de una cadena mayor, que es la historia del poder legislativo nacional. El régimen encabezado por el general Porfirio Díaz Mori se apegó siempre a la legalidad constitucional, razón por la cual este tipo de procesos deben merecer mayor atención de parte de los investigadores.

Capítulo I

La Constitución de 1857 y la legislación electoral.

Las constituciones –todas- deben ser la respuesta legítima y estatutaria a los siempre fluctuantes intereses e ideales de un pueblo. Por ello, los sucesivos gobiernos republicanos liberales del siglo XIX y de principios del XX, a fin de mantener vigente el imperio de la ley, tuvieron que adicionar o reformar la Carta Magna de 1857, adecuándola a las exigencias de su momento histórico¹.

La Constitución política mexicana de 1857 fue, para su época, y a pesar de las críticas de su falta de adaptación a la realidad nacional decimonónica, un instrumento renovador y de ideas avanzadas. Los constituyentes de 1857, la elaboraron con la idea de que fuera el esquema básico que ordenara la hasta entonces convulsa vida nacional, que había vivido la inestabilidad gubernativa como cotidianeidad; su intención era que la existencia de la nación se organizara con base a conceptos y principios inspirados en el liberalismo, la soberanía y la democracia.

Nuestros grandes documentos jurídicos son una ventana privilegiada a través de la cual podemos asomarnos a nuestra historia. El marco legal resultado

¹ Emilio O. Rabasa. *Mexicano: esta es tu Constitución*. México, Cámara de diputados, 1982 , p. 7

del Congreso Constituyente de 1856-1857, que reunió en su seno a distinguidos talentos del México de la Reforma, no solo es uno de esos documentos valiosos, sino que también es el gran telón de fondo que es necesario comprender y analizar para dotar de un contexto jurídico-político al tema principal de este trabajo, que es el debate que se suscitó en la cámara de diputados con motivo de la discusión de la reforma constitucional que permitía la reelección inmediata del general Díaz.

a.-) El Congreso Constituyente de 1856-1857.

Iniciada por el viejo caudillo insurgente Juan Alvarez, en contra del gobierno centralista del general Santa Anna, la Revolución de Ayutla fue el umbral de acceso al poder de una generación liberal dividida en puros (también llamados radicales o jacobinos) y moderados². Las razones para su división ideológica no se referían al tipo de régimen político que debía adoptar el país, sino que giraba en torno a los alcances y naturaleza de las reformas sociales a llevar a cabo³. Para ello no había duda sobre la forma de gobierno. Esta debía ser republicana y federal. La parte más exaltada de esta nueva generación manifestaba una creencia casi religiosa en la eficacia de la ley para gobernar y transformar la sociedad, y estaba convencida que sólo la reforma social podía alterar el

² Francois Xavier Guerra. *México: del antiguo régimen a la revolución*. México, Fondo de Cultura Económica, 1991, p.31

³ Luis Medina Peña. *Invenición del sistema político mexicano*. México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p 274.

escenario político para consolidar definitivamente la opción republicana y federal, para lo cual se hacía necesario un nuevo marco jurídico.

El histórico reto estaba formulado y la responsabilidad recayó en el Congreso Constituyente de 1856. La obra de los constituyentes, observó Emilio Rabasa, comprendía dos tareas bien determinadas, aunque algunas veces se confundieron en un objetivo común: la primera, de destrucción y demolición, consistía en aniquilar al bando conservador, acabar con la influencia del clero en los asuntos políticos y hacer la reforma social como tantas veces lo dijeron los progresistas; la segunda, de reconstrucción y organización, consistía en establecer el gobierno nacional con el mecanismo más adecuado para un funcionamiento armonioso, tan automático como fuese posible.

Las condiciones personales para llevar a buen puerto una y otra empresa eran casi incompatibles: la primera requería convicciones absolutas, voluntad resuelta a todos los extremos, acción enérgica y hasta pasión de sectarios; la segunda, requería reflexión serena, espíritu previsor, más inclinación a los consejos de la experiencia que a la lógica de los principios, y severidad de criterio para sojuzgar el entusiasmo, haciendo prevalecer un patriotismo adusto⁴.

⁴ Emilio Rabasa. *La Constitución y la dictadura*. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2002, p.213

Entre el 18 de febrero de 1856, fecha en que se efectuó la solemne apertura de sesiones del Congreso, y el 5 de febrero de 1857, día en que los diputados y el Presidente de la República firmaron la nueva Constitución, los representantes del pueblo discutieron, en ocasiones con una gran pasión, los puntos doctrinales de los modelos políticos elaborados en las primeras décadas de ese siglo, y que deseaban rigieran también en suelo mexicano.

Sería ingenuo suponer que el Congreso Constituyente fue una reunión homogénea y armoniosa de liberales dispuestos a transformar las ideas progresistas en normas jurídicas. Las cosas no fueron así, pues los debates entre puros y moderados llegaron a situarse irreductibles, y más de una vez la estrategia de los moderados estuvo a punto de llevar al fracaso los propósitos de la revolución de Ayutla⁵.

El Congreso Constituyente de 1857 estaba compuesto de 310 diputados entre propietarios y suplentes. Cada estado de la nación estuvo representado por el número de legisladores que le correspondieron de acuerdo a un porcentaje sobre la población de cada uno. Un número significativo de sus integrantes era de tendencia liberal moderada; empero, un grupo de diputados particularmente activo fue el de los liberales radicales, también denominados “puros”.

⁵ Francois Xavier Guerra. *México: del antiguo régimen a la revolución. op. cit.* p. 32.

Fue en este contexto que tuvo lugar la discusión del nuevo marco legal, en el que se enfrentaron y sometieron a votación los puntos de vista sobre cómo lograr la regeneración nacional de los dos grupos liberales representados en la Asamblea. En este escenario, los patriarcas de las luchas reformistas se caracterizaron por la defensa ardorosa del proyecto de país que deseaban construir, así como el perfil de ciudadano que se pretendía llegar a ser.

b.-) La discusión de los artículos más representativos y su aprobación.

Los ciento veintisiete artículos que la componen se reagruparon bajo ocho títulos, pero como señala Xavier Guerra, el reparto desigual de los artículos da una primera indicación sobre sus preocupaciones principales: veintinueve sobre ciento veintisiete conciernen a los derechos del hombre, veinticinco al poder legislativo, quince al ejecutivo, y trece al judicial.⁶

El federalismo, al tenor del Plan de Ayutla, se impuso de entrada sin discusión. Pero este no fue el único rasgo distintivo del Congreso de 1856-57 y de la constitución resultante. Los puros se propusieron partir del supuesto de no reformar la Constitución de 1824, sino elaborar una totalmente nueva. En efecto, desde las primeras sesiones se rechazó la moción del moderado Marcelino Castañeda, para que el Congreso declarara restablecida aquella Constitución con

⁶ *Ibídem.*

las reformas discutidas en 1842 y en 1847, estrategia para salvar a la católica como religión oficial y contrarrestar así los aires que anunciaban ya la libertad de cultos.⁷

Otro de los grandes temas abordados por el Congreso Constituyente fueron los derechos del hombre, que los congresistas consideraron consustanciales a la naturaleza humana y no producto de la ley. En concordancia con esta idea, elaboraron una serie de garantías que obligaban a los poderes públicos a respetarlos,⁸ durante el transcurso de la Asamblea uno de los puntos que levantó polémica fue el artículo 5°. Si bien la primera parte de dicho enunciado fue aprobada sin gran discusión por 43 votos contra 37, la segunda dio la pauta para una amplia disertación parlamentaria. La fracción polémica del artículo rezaba: “La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso.”⁹

Este enunciado provocó que la discusión se centrara en la posibilidad de dar lugar a interpretaciones absurdas, porque el común de la gente podría considerar que la Constitución no autorizaba el matrimonio, ya que éste es un contrato que sacrifica la libertad del hombre para toda la vida. También hubo pronunciamientos en contra de que la ley estableciera su imperio en el terreno de los votos

⁷ *Ibídem.* p.41.

⁸ Luis Medina Peña. *Invención del sistema político mexicano, op. cit.* p. 111

⁹ Francisco Zarco. *Historia del Congreso Constituyente.* México, Colegio de México, 1957, p 63.

religiosos, ya que se manifestaba en la tribuna que el legislador no podía mezclarse en las relaciones del hombre con Dios.

La fracción radical del Congreso también entró de lleno en la discusión de dicho asunto, ya que consideraba que los votos de castidad que se hacían por individuos de ambos sexos en los variados conventos existentes en la época, eran contrarios al bienestar de la sociedad, porque no permitían la unión de los sexos, que era indispensable para la existencia de la familia. Asimismo, argumentaban que la vida del claustro engendraba trastorno mental y desesperación, además de que la vida conventual obraba en contra de la naturaleza humana, ya que las pasiones eran las mismas en todas las personas y en todo lugar.

Al llegar al final de la discusión, la Comisión declaró que el artículo no alcanzaba al matrimonio, y que en lo tocante a los votos religiosos, la intención era que fueran libres, sin que hubiese coacción civil. En este sentido, no se tenía la intención de prohibir los votos, ni se buscaba la exclaustración, porque afirmaban que si ese hubiera sido el caso, lo habrían dicho con toda franqueza, ya que eran personas con el suficiente valor para sostener sus opiniones.¹⁰

Después de tan empeñada discusión, la parte segunda del artículo en cuestión fue aprobada por 69 votos contra 22.

¹⁰ Francisco Zarco. *Historia del Congreso Constituyente. op. cit.* p. 74.

El artículo 13º, correspondiente a la supresión de los fueros, fue aprobado sin polémica de por medio por 78 votos a favor contra 1, el 20 de noviembre de 1856. De igual manera, el enunciado 27º que transformaba en constitucional la desamortización de los bienes del clero, fue aprobado por mayoría, en la sesión del 24 de enero de 1857.

En lo que respecta a la discusión del artículo 123º, referente al tema de la relación del Estado con la Iglesia, se distinguió por el debate en torno a que el poder militar y el poder eclesiástico, siempre que se habían salido de sus esferas legítimas, habían sido por espacio de mucho tiempo los enemigos naturales de la libertad.

El diputado Ponciano Arriaga¹¹ reconocía que el Patronato¹² le correspondía al Soberano, pero había que tener presente una cuestión: el clero entendía por tal a los reyes y emperadores, ya que el monarca asumía la soberanía, pero que, tratándose de una República, “donde la autoridad está promediada, donde ningún

¹¹ Liberal y jurisconsulto mexicano nacido en 1811. Fue en varias ocasiones diputado federal, fue uno de los baluartes del Plan de Ayutla, enarboló con Juárez la bandera de la Reforma, electo diputado al Congreso de 1856. en *Diccionario Biográfico de historia de México*. México, Edit. Del Magisterio, 1964, p.65.

¹² En 1501, el papa advirtió a la corona española de su obligación de propagar la fe entre los indígenas, cediéndole en recompensa el derecho de cobrar el diezmo. En 1508, el papa Julio II dio forma definitiva a tales acuerdos, en lo que se conoció como Patronato, ratificando el derecho de España de ocupar las nuevas tierras, en el entendido de que debía fundar y patrocinar la Iglesia. Roberto Gómez Ciriza. *México ante la diplomacia vaticana*. Fondo de Cultura Económica, México, 1977, pp. 56-61, citado por Mario Ramírez Rancaño. *El Patriarca Pérez. La Iglesia Católica Apostólica Mexicana*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p.13.

poder es soberano, se necesita establecer que el patronato corresponde a todos los poderes, a quienes el pueblo encomienda el ejercicio de la soberanía.”¹³

En el seno del Congreso surgió una duda: ¿cuales serían los poderes federales que habrían de ejercer las facultades de las que se hablaba?. En respuesta a esta interrogante, se llegó a la conclusión de que según la naturaleza del asunto, ya fuera el Congreso, el gobierno o la Suprema Corte de Justicia, sería el poder ejecutante de las mencionadas facultades. Este punto fue aprobado por 82 votos contra 4.

En la sesión del 15 de octubre de 1856, se puso a debate la sección segunda del título III, el cual hacía referencia a la organización del Poder Ejecutivo, de importancia fundamental para el desarrollo del presente trabajo. De entrada fue aprobado por unanimidad el artículo 75 de la Constitución, en cuyo contenido se lee: “Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos “.¹⁴

Cuando se sometió al pleno el artículo 76 para su discusión, fue motivo de una gran polémica, ya que trataba de si la elección presidencial debía de realizarse de manera directa o indirecta. El ala radical del Congreso argumentó que, si bien la idea del sufragio directo había fracasado en lo tocante a la elección

¹³ Francisco Zarco. *Historia del Congreso Constituyente. op. cit.* p.862

¹⁴ *Ibidem.* p.708.

de diputados, ahora las circunstancias eran totalmente diferentes, ya que se refería a una sola persona y no de varios candidatos, lo que reducía las posibilidades de manipulación y división de la sociedad. En relación a esta idea, los diputados progresistas solicitaron a la Comisión argumentos sólidos, a fin de establecer el sufragio indirecto, que a su juicio se alejaba mucho de la verdadera voluntad popular.

La respuesta que los legisladores dieron a esta solicitud fue que, después de debatirse el punto en el seno de la Comisión, se había llegado a la conclusión de que se debía inclinar por la elección indirecta, pues la otra opción representaba grandes inconvenientes para el país. Los argumentos que sustentaban esta decisión, se apoyaban en las tesis de que con la elección directa no se acabarían las divisiones civiles, sino al contrario, ya que si se presentaban muchos candidatos, los vencidos podrían convertirse en cabezas de discordia, lo que llevaría el riesgo de levantamientos revolucionarios, con lo cual, indudablemente se fomentaría la anarquía.

En este mismo tenor, se apuntó que la elección directa podría constituir un elemento de discordia. Los diputados a favor de la modalidad indirecta reconocieron que la idea democrática del sufragio universal si bien tenía un

importante atractivo, no por ello dejaba de representar un grave peligro en su aplicación, responsabilidad que la Comisión no tenía la intención de asumir¹⁵.

En el recinto parlamentario, los diputados que abogaban por la forma directa de la elección, se defendieron esgrimiendo los argumentos necesarios para hacer triunfar su idea, señalando que era falso que si hubiera muchos candidatos, arribaría al país la discordia y los vencidos en el campo electoral disputarían el poder al vencedor. Consideraron que si la elección fuera directa, los candidatos serían menos y mejores, porque el mérito triunfaría sobre la intriga. Manifestaban que, aun si se diera el caso, el elevado número de candidatos no tenía porqué ser un mal en la democracia, donde el poder pasa de mano en mano.

En este ambiente de debate, los legisladores partidarios de la forma indirecta fueron enfáticos al señalar los defectos de la elección directa, pero los diputados progresistas igualmente enumeraron los inconvenientes que según ellos veían en esta modalidad. Los congresistas “puros” manifestaron que no era necesario que su imaginación los inventara, ya que según apuntaban, la historia era pródiga en enseñarlos, motivo por el cual señalaban que del sufragio indirecto habían surgido todos los presidentes de México, y al recorrerse sus nombres no era posible hallar sino como excepción la probidad y la aptitud. Asimismo, argumentaban que habían sido muy pocos los verdaderos hombres de Estado, pues la gran mayoría no comprendió lo noble y lo elevada de su magistratura, y por el contrario, habían

¹⁵ *Ibídem.* p.705

sido muchas las dilapidaciones y los escándalos, siendo todo esto obra y gracia de la elección indirecta.¹⁶

Los liberales “puros” sostenían que la voluntad popular era falseada en la elección indirecta, pues aseveraban que la corrupción era más factible en esta modalidad de elección. Según la lógica de los congresistas que estaban a favor de la forma directa, era más difícil corromper y seducir a millones de votantes, mientras que la intriga, el cohecho y la coacción, eran más fáciles de practicar en los colegios electorales, que se componían de un número muy reducido de personas.

En un sistema de elección directa, cohechar a todo un pueblo, no hubiera resultado posible, ya que no había que darle, y es sabido que nadie se corrompe gratis, argumentaban los assembleístas, mientras que en la forma indirecta existía la posibilidad de darles dinero o empleos a los miembros de los colegios electorales.¹⁷

Asimismo, se puso en la mesa de discusión el tema de si todas las elecciones, ya fueran para elegir congresos locales, gobernadores de los estados, para el Congreso general o para elegir presidente de la República, debían ser directas o indirectas. Asunto de importancia, ya que si se hubiera aprobado tal situación, unos funcionarios habrían derivado su poder más directamente del

¹⁶ *Ibídem.* p. 708.

¹⁷ *Ibídem* p.705

pueblo, y por consiguiente, habrían tenido más prestigio que otros, lo cual, no resultaría de ninguna manera benéfico al buen orden de la República, y citaban como ejemplo el hecho de que un presidente que hubiese sido nombrado por el sufragio directo, podría sobreponerse al Congreso, bajo la creencia que su autoridad era mucho más popular, por lo que los diputados constituyentes optaron por no aprobarla.

Finalmente, y después de muchas horas de debate, se declaró el punto suficientemente discutido y se dio lugar a la votación. El artículo quedó de la manera siguiente: “Art.76. La elección de Presidente será indirecta en primer grado y en escrutinio secreto, en los términos que disponga la ley electoral “.¹⁸

El debate en torno al artículo 77 constitucional fue menos prolongado. Se procedió a dividir el enunciado en partes, y la discusión comenzó con la exigencia o no de la residencia del que se postulase para la primera magistratura. Hubo quien se pronunció en contra de solicitar tal requisito, ya que se argumentó que ciudadanos muy dignos podían residir en el extranjero, y que por el hecho de ausentarse del país, ningún mexicano era indigno de ocupar los puestos públicos.¹⁹

¹⁸ *Ibídem.* p.708

¹⁹ *Ibídem* p. 709.

Sin embargo, prevaleció la idea de que los residentes en el país podían reunir más conocimientos de la situación nacional, además de que se resaltó el hecho de que si la elección recayese en un ausente, representaría un gran peligro, ya que el país se vería sometido a un interregno en el que la tranquilidad pública podía verse comprometida.

De las anteriores discusiones se acordó la división del artículo: la primera parte, que abrazaba todos los requisitos, excepto el de la residencia, fue aprobada por unanimidad; la segunda, que exigía la residencia, fue aprobada por 63 votos contra 17, quedando la redacción final en los siguientes términos:

Art. 77. Para ser Presidente se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, de treinta y cinco años cumplidos el día de la elección, no pertenecer al estado eclesiástico y residir en el país al tiempo de verificarse la elección.²⁰

Otro de los artículos que competía a la figura presidencial era el 78, de importancia central para nuestro trabajo, y que también fue aprobado sin mediar discusión. En él se estableció que el primer mandatario de la Nación ejercería el cargo por cuatro años y tomaría posesión el primero de diciembre.

Cabe señalar que el artículo 78 de la Constitución de 1857, que posteriormente sería reformado por la ley de 5 de mayo de 1878, se concretaba

²⁰ *Ibídem* p. 721.

exclusivamente a establecer el período de cuatro años para el ejercicio del poder ejecutivo por el ciudadano electo. Es importante hacer notar que en este contexto, el tema de la reelección presidencial no tuvo cabida, en tanto que en ese momento no tenía una significación prioritaria ni era motivo de preocupación para los miembros de la Asamblea encargada de elaborar el nuevo marco legal.

Los tribunos que debatieron en ese histórico Congreso Constituyente, no consideraron un peligro para la vida institucional de nuestra joven nación, la reelección sin cortapisas del Jefe del Ejecutivo. Para los legisladores liberales de esa época, eran otros los rubros sobre los que había que poner especial atención, como lo eran la modalidad de la elección, y el requisito de residencia del futuro presidente.

En este sentido, podríamos afirmar que los legisladores liberales dejaron a los ciudadanos la más completa libertad de sufragio, a fin de que pudieran reelegir al gobernante que por sus relevantes méritos y por sus servicios eminentes prestados a la nación, se hiciera digno de continuar en el poder. Por lo tanto, es importante señalar que el liberalismo primigenio mexicano y el concepto de democracia, no estaban peleados con la posibilidad de la reelección presidencial.

Por lo anterior, podríamos decir que la obra del Constituyente de 1856-57, marcó un avance fundamental en las instituciones de la nación y creó, a la vez, algunos de los instrumentos indispensables para iniciar la reforma de las

tradicionales estructuras económicas y sociales que impedían el desarrollo del país. La revolución de Ayutla cristalizó en la Constitución de 1857, base en que se apoyó el gobierno de Benito Juárez para promulgar las leyes que separaron en definitiva la vida civil y la religiosa, para posteriormente servir de sustento legal al prolongado régimen del general Porfirio Díaz²¹.

Desde luego que la Constitución de 1857 no resolvió por sí misma la grave crisis legada por décadas de inestabilidad económica y política, fue motivo de guerras, pero, aún así, se convirtió en el símbolo nacional por excelencia²². Pero ahora, vista a distancia, es un perfecto resumen de las aspiraciones de un país decidido a encontrar una fórmula de integración nacional. Lo anterior confirmaría lo que anotara Porfirio Parra, de que “México tuvo desde el 5 de febrero de 1857 un código fundamental que elevaba al carácter de leyes supremas los principios del credo democrático, del federalismo y las aspiraciones del partido liberal”.²³ Ya no hubo retroceso en ese sentido.

El Congreso Constituyente - como lo expresara León Guzmán²⁴ al contestar las palabras del Presidente de la República en el acto de jura de la Constitución de

²¹ Francois Xavier Guerra. *México: del antiguo régimen a la revolución. op. cit.* p. 29

²² *Ibíd.* p. 29.

²³ Porfirio Parra. *Sociología de la reforma*. México, Empresas Editoriales, 1948, p. 115.

²⁴ Nació en 1821, en el Estado de México, estudio la carrera de leyes, fue diputado al Congreso Constituyente de 1856-57, y presidente del mismo del 31 de diciembre de 1856 al 4 de febrero de 1857, habiendo sido uno de los primeros en jurar dicha Constitución emanada de ese Congreso. Posteriormente sería Ministro de Fomento y de Gobernación. Murió en 1884. en *Diccionario biográfico de historia de México. op. cit.* p. 481.

1857 - no podía lisonjearse con la idea de que su obra hubiese resultado en todo perfecta. Bien sabían que nunca lo fueron las obras de los hombres, y que la constitución mexicana recién promulgada, apuntaba a una aspiración, más que a la realización efectiva de las leyes, problema que después de todo, no es meramente mexicano, sino tal vez humano.²⁵ Sin embargo, creían haber conquistado principios de vital importancia, y dejaron abierta una puerta amplísima para que los hombres del porvenir pudieran desarrollar hasta su último término la justa libertad.

- La Ley Orgánica Electoral de 1857.

El sistema electoral, con su legislación correspondiente, constituye una parte primordial de cualquier régimen político, ya que a través de él se implantan los mecanismos o reglas que señalan la manera en que los ciudadanos pueden tomar parte en los diferentes procesos electorales, ya sea en el plano local, estatal o nacional.

La celebración de elecciones libres, competitivas y plurales, constituye uno de los signos más claros del ejercicio de la democracia de un pueblo, por lo que el estudio de éstas, en cualquier sistema político, brinda la oportunidad de analizar las diferentes formas en que un grupo, una facción o un partido, logran imponer su proyecto político, económico y social sobre el resto de la sociedad, a través de la

²⁵ Emilio Rabasa. *La evolución histórica de México*. México, Porrúa, 1956, p. 40

manifestación, por la vía legal de las urnas, de las preferencias, las opciones, las inclinaciones, etcétera, que a su vez reflejan no sólo actitudes políticas, sino también el tipo de relaciones prevalecientes.²⁶.

Como señalan Guy Hermet y Alain Rouquié,²⁷ aún cuando en las elecciones clasificadas como no clásicas, los resultados de las mismas de ninguna manera exponen al grupo en el poder, y son una consulta cuyo resultado se conoce con anterioridad, no en razón de la preferencia constante y clara de la mayoría de electores, sino por la capacidad de maniobra de los poderes centrales, en realidad la celebración consuetudinaria de elecciones en los regímenes autoritarios²⁸ sirve como un barómetro político. A lo largo de las diferentes fases en que se van desarrollando las elecciones no competitivas, el grupo en el poder se ve obligado a explicitar posturas ideológicas, y hacer uso de su capacidad de movilización.

En razón de lo anterior, resulta de importancia tener en cuenta la Ley Orgánica Electoral del 12 de febrero de 1857, que nació bajo la égida de la recién promulgada Constitución de ese año. Con la expedición de dicha ley, se dio continuidad por varias décadas a un régimen electoral indirecto en primer grado; se conservaron el carácter público del voto y la mayoría simple en la elección

²⁶ Alain Rouquié, *¿Para qué sirven las elecciones?* México, Fondo de Cultura Económica, 1982., p. 67.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ "Llamaremos situación autoritaria a las situaciones locales o regionales marcadas por la preponderancia de relaciones verticales de solidaridad. La verticalidad de las relaciones sociales permiten la utilización autoritaria de las instituciones de la democracia pluralista". en Alain Rouquié. *¿Para qué sirven las elecciones?* op. cit. pp.60-61

primaria, así como el voto secreto y la mayoría absoluta con posibilidad de dos vueltas en la elección secundaria; en la junta electoral de distrito - segunda fase -, junto con los diputados se elegía al Presidente de la República y al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quienes de no tener mayoría absoluta pasaban a ser electos por el Congreso; también se nombraba a los magistrados; no se cambió la función de la boleta electoral como instrumento de registro e identificación del votante y como medio donde se señalaba la orientación del voto²⁹.

Debemos mencionar que en este devenir de las instituciones electorales liberales mexicanas, existió un interregno. Como sabemos, Napoleón III, fiel a su Gran Designio Napoleónico, ideado para ser la contraparte europea del Destino Manifiesto estadounidense, en conjunto con los poderes conservadores mexicanos, logró establecer por pocos años, un trono mexicano. Fue durante el Imperio de Maximiliano, que dentro del marco del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, se publicó una Ley electoral de Ayuntamientos (1 de noviembre de 1865). En su primer artículo decretaba que el nombramiento de los ayuntamientos se haría por elección popular directa. El decreto repetía las taxativas para votar de la ley electoral de 1857, pero agregaba que sólo podrían hacerlo quienes supieran leer y escribir y pagaran más de 20 pesos al año de contribuciones, aunque esto únicamente se aplicaría en las municipalidades que sobrepasaran los 5000 habitantes.

²⁹ *Ley Orgánica Electoral. Op. cit.*

Con la Ley Orgánica Electoral de 1857, nacida del pensamiento liberal de los hombres de la reforma, se inició un nuevo estadio del desarrollo electoral mexicano: aparecen los distritos electorales, que comprendían 40,000 habitantes o fracción superior a 20,000, lo que representaba una diferencia cualitativa y cuantitativa con respecto a las leyes centralistas; el voto es universal y la elección indirecta en primer grado; desaparecen las juntas departamentales que elegían Presidente de la República y Cámara de Senadores y pasaron a ser los propios electores los que hacían tales elecciones.

Las principales reformas que tuvo la Ley Orgánica Electoral fue la del 5 de mayo de 1869, que estipulaba que no podían ser diputados aquellos que hubiesen servido a la intervención o al llamado Imperio. El decreto del 8 de mayo de 1871, que reforma el artículo 34, de 23 de octubre de 1872, en donde se agregaba que además del Presidente, los secretarios de Estado, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y los funcionarios federales, no podían ser diputados en el distrito de su jurisdicción: los jueces de distrito y de circuito, los jefes de hacienda federal, los comandantes y militares, los gobernadores y tampoco los jefes políticos³⁰.

El 15 de diciembre de 1874 se expidió el Decreto para la elección de senadores, con esta reforma se establecía el sistema bicameral y se regulaban las elecciones para estos mismos. Finalmente, el 16 de diciembre de 1882, se realiza

³⁰ Felipe Tena Ramírez. *Leyes fundamentales de México*. México, Porrúa, 1971, p.88.

otra reforma que ordenaba que las juntas electorales de distrito eligieran al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y a 11 magistrados, en lugar de 10, como señalaba la ley³¹. Son estas pues, las reglas formales, es decir, el régimen político que estaba en vigencia durante el periodo que nos ocupa en este trabajo.

De manera que toda la experiencia jurídica y política que habíamos acumulado como nación independiente, desembocó en la Ley Orgánica Electoral que se aprobó en el contexto de la Constitución de 1857. Era esta legislación electoral la que imperaba en la Nación en el momento en el que se empieza a discutir en 1887 una nueva reforma a los artículos 78 y 109 constitucionales para permitir, bajo el amparo de la ley, la reelección inmediata del general Porfirio Díaz, Presidente Constitucional de los mexicanos.

Es importante apuntar como es que varios aspectos legales tales como: las restricciones a la emisión del voto, que en ocasiones se limitó por la vía de la renta, y en otras legislaciones por la condición étnica y social de los individuos; el establecimiento del sufragio universal masculino; la elección indirecta – primero en tres grados y después del Congreso Constituyente de 1857 quedó reducida a 2 – y la falta de un sistema de partidos, son figuras jurídicas que transitan durante todo el siglo XIX, desde la Constitución gaditana, pasando por las diferentes Cartas Constitucionales que en su momento rigieron la vida política de nuestro país, ya fueran de corte centralista o federalista.

³¹ *Ibídem.*

La Constitución de 1857, con lo positivo que tuvo de legalidad social y política, fue el gran referente de los movimientos revolucionarios porfiristas que vendrían después y que continuaron modelando la faz de nuestro país.

Capítulo II

Los planes de la Noria, de Tuxtepec y la Reforma de Palo Blanco.

Durante casi todo el siglo XIX los altos jefes militares no solo pertenecieron a una de las instituciones tradicionales por excelencia, sino que también fueron un factor desestabilizador desde el punto de vista político. El ejército, o partes importantes de él, fueron los promotores de casi todos los vaivenes revolucionarios que sacudieron al México decimonónico, y para probarlo existe una larga lista de planes, revueltas y pronunciamientos.¹

Es importante señalar que los militares recurrían al pronunciamiento no para asolar al país, sino que era un medio para contrarrestar y enfrentar a la clase política civil ubicada en el Congreso, en la presidencia y en los gobiernos de los estados. La acción política de los altos jefes castrenses aconteció en un ambiente caracterizado por la ausencia de un sistema de partidos capaz de encauzar, vía la participación y la articulación de demandas, a las diversas corrientes de opinión de la época. Es en este contexto en el que surgen los planes de Porfirio Díaz de La Noria y posteriormente el de Tuxtepec, con su respectiva reforma en Palo Blanco.

¹ Luis Medina Peña. *Invenición del sistema político mexicano*. México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p.p 243-244.

El Plan de La Noria.

En las primeras tres décadas y media que siguieron a la independencia, trataron de gobernar a México figuras del ejecutivo en número superior a la cantidad de años que transcurrieron. Benito Juárez heredó la tarea en 1858 y murió en el cargo en 1872. Si se mide por la supervivencia, fue un político con éxito, y para lograr tal hazaña, instrumentó medidas políticas, que si bien le redituaron beneficios, también le generaron costos políticos.²

Después del emblemático año de 1867, triunfante ya la República y vencida el ala conservadora, el presidente Juárez pretendió gobernar ajustándose a el modelo liberal representado por la Constitución de 1857, pero le resultó evidente que esta no encajaba con la realidad del país, por lo tanto, su actuar no se limitó al esquema que planteaba el marco legal. De esa manera logró sobrevivir políticamente muchos años, pero al hacerlo se buscó enemigos, pues para sus adversarios, el no aplicar de una manera ortodoxa la Carta Magna, representaba que se estaba violando el estado de derecho vigente en el país. La cuestión es que puso al alcance de sus opositores una abundante argumentación que les sirvió para atacar a su gobierno.

Durante sus últimos diecisiete meses de vida, Benito Juárez tuvo que enfrentar dos importantes ofensivas contra su régimen. La primera fue una combinación

parlamentaria levantada contra su partido en el Congreso, y la segunda fue una importante insurrección militar encabezada por el general Porfirio Díaz, que esgrimió como bandera el plan de La Noria.

En 1871 la alianza política juarista estaba en desorden. Sebastián Lerdo de Tejada, que había servido a Juárez con lealtad desde 1863, se daba cuenta del descontento contra el presidente y al parecer se sentía heredero natural de la alianza y del programa liberales, por lo cual debía ser el sucesor en la presidencia en 1871. En su calidad de miembro del gabinete después de 1867, Sebastián Lerdo de Tejada había dedicado gran parte de sus energías a crear una facción de empleados públicos leales a él. Cuando Lerdo de Tejada se convenció de que Juárez proyectaba su propia reelección, dimitió del gabinete en enero de 1871 para preparar su propia campaña electoral.³

Así pues, el primer ataque al gobierno juarista se comenzó a cocinar a partir de que se hizo evidente que Juárez buscaba la reelección, y que tanto Sebastián Lerdo de Tejada como Porfirio Díaz se le enfrentarían. De manera que los lerdistas del Congreso se unieron a los porfiristas para superar la mayoría relativa juarista. Los dirigentes de los bloques juarista y lerdista confirmaron el acuerdo,

² Laurens B. Perry. *Juárez y Díaz. Continuidad y ruptura en la política mexicana*, México, Era, 1996. p. 135.

³ *Ibidem.* p.136.

conocido entonces y después como la *liga*. Dicho acuerdo se basaba en lo siguiente: se alternarían la presidencia del Congreso, instalarían el ayuntamiento lerdistas de la ciudad de México en lugar de un organismo juarista, reconocerían el gobierno porfirista de Vicente Jiménez en Guerrero, harían aprobar un proyecto de ley electoral y otro para poner fin a la declaración presidencial de estados de sitio mediante los cuales las fuerzas federales ganaban las elecciones.⁴

Sin embargo, al poco tiempo, dicha alianza comenzó a resquebrajarse, pues los porfiristas empezaron a sufrir fracturas internas. Al interior del grupo de Porfirio Díaz comenzaron las recriminaciones y jaloneos entre Manuel Mendiola y Justo Benítez⁵, y a eso se sumaron las acusaciones cruzadas de que tanto porfiristas como lerdistas votaban en contubernio con los juaristas, faltando así al acuerdo original de votar las iniciativas y acuerdos en comunión.

Para el verano de 1871 era clara la división que existía en el grupo del general Díaz. El grupo porfirista se componía de un sector que propugnaba la victoria electoral mediante la alianza política y de otro que aspiraba al control absoluto del poder por medio de la insurrección militar.

⁴ *Ibídem*. 136 p.

⁵ Abogado oaxaqueño, nació en 1832, fue oficial mayor del gobierno de Juárez, cuando este era gobernador de Oaxaca, participó en la Guerra de tres años, así como en la de Intervención, estuvo preso junto a Díaz en Puebla durante el Imperio, cuando triunfó Tuxtepec, desempeñó la cartera de Hacienda y la presidencia del Senado, murió en 1900. en *Diccionario Biográfico de historia de México*. México, Edit. del Magisterio, 1964, p. 106.

La política de la *liga* corría paralela a la política electoral. El periódico *El siglo XIX* dirigía la contienda electoral a favor de Lerdo, y en su número del 2 de febrero publicó su plataforma. Por su parte, Ignacio Altamirano⁶ en *El correo de México* y Manuel María Zamacona⁷ en *El Mensajero* defendían a Díaz. El 11 de enero este último publicó el programa de Porfirio Díaz. El ideario electoral porfiriano destacaba la necesidad de observar la constitución, respetar las garantías individuales, asegurar la libertad de las elecciones y proteger la división entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Atacaba la corrupción en el gobierno, el desmesurado crecimiento de la burocracia y la intervención del ejército en la política. Propugnaba además el mejoramiento del crédito público y proponía una amnistía completa para todos los mexicanos.⁸

El voto en los colegios electorales se dividió entre los tres candidatos presidenciales, sin dar a ninguno de ellos la requerida mayoría absoluta. Con ello la nación se vio obligada a esperar la apertura del Congreso, en el que se escogería entre los dos candidatos de la delantera, Juárez y Díaz. Sin embargo, los resultados en el Congreso convirtieron a los lerdistas en fuerza decisiva: en el

⁶ Abogado, nacido en 1834, seguidor del Plan de Ayutla, combatió la intervención francesa y el Imperio, diputado al Congreso de la unión, fue un gran orador y destacado miembro del panorama literario del México del siglo XIX. Murió en 1893. En *Diccionario biográfico de historia de México. op. cit.* p. 93

⁷ Político y escritor mexicano, nació en Puebla en 1826. Defensor de los principios liberales y reformistas, fue ministro de Relaciones durante el gobierno de Juárez, perteneció a la Comisión de Reclamaciones entre México y Estados Unidos. En 1880 fue candidato a la presidencia de la República, posteriormente fue Ministro de la Suprema Corte, murió en mayo de 1904. en *Diccionario Biográfico de historia de México. op.cit,* p. 1177

⁸ Laurens B. Perry. *Juárez y Díaz. Continuidad y ruptura en la política mexicana.* 136 p.

VI Congreso tomarían asiento, según Ezequiel Montes⁹, noventa y ocho juaristas, sesenta y dos lerdistas y cincuenta y dos porfiristas para decidir si el próximo presidente debía ser Juárez o Díaz. Montes preveía que Juárez haría cualquier cosa para ganar. A Díaz le aconsejaba reconstruir una “liga antireeleccionista” lerdistas- porfiristas para llegar a la presidencia y establecer un gabinete mixto. Montes veía que los porfiristas estaban divididos; mientras unos deseaban la victoria electoral por medio de un pacto político, otros ansiaban alcanzar el poder total mediante la insurrección. En una palabra, escribía Montes,” sin la liga parlamentaria llegará la revolución, que acarreará a nuestro desdichado país toda clase de males.” Ezequiel Montes estaba en lo cierto, que sin un acuerdo político entre las principales fuerzas opositoras al régimen juarista, habría turbulencias políticas serias. Díaz finalmente optó por la insurrección.¹⁰

Otros políticos coincidían en la apreciación de Ezequiel Montes. El 28 de agosto Ramón Márquez Galindo, escribía que había obtenido un escaño en el Congreso y que se apresuraba a ir a México con otros diputados electos para hablar con los lerdistas: “según mis noticias, me parece que nuestros amigos de México no han tenido tacto suficiente para atraerse a los lerdistas, lo cual era imperativo, pues la alternativa a la *liga* era el juarismo o la revolución”¹¹. No llegó a tiempo el diputado

⁹ Orador y político mexicano. Nació en 1820. Abogado, en 1850 fue diputado, con el presidente Comonfort fue ministro de Justicia, en 1857 fue enviado plenipotenciario a la Santa Sede. Fue Ministro de Justicia e Instrucción Pública. Murió en 1883. en *Diccionario Biográfico de historia de México. op. cit*, p. 725.

¹⁰ Laurens B. Perry. *Juárez y Díaz. Continuidad y ruptura en la política mexicana. op. cit*, 145 p.

¹¹ *Ibíd.*

Márquez Galindo, la fusión juarista-lerdista se había consumado tres días antes. Díaz prestó oído a las voces de la guerra, iniciando así la última ofensiva que habría de enfrentar el presidente Juárez.

Mediante el plan de La Noria, y dirigiéndose al pueblo mexicano, Díaz proclamó que la reelección forzosa y violenta del Ejecutivo Federal había puesto en peligro las instituciones nacionales, y acusó que en el Congreso una mayoría regimentada por medios vergonzosos había hecho inútiles los nobles esfuerzos de los diputados independientes, según él, tenían convertida a la Representación Nacional en una cámara cortesana, obsequiosa y servil ante el titular del poder Ejecutivo.¹²

De igual manera se refirió a la Suprema Corte de Justicia, señalando que los jueces y magistrados honorables eran sustituidos por agentes sumisos del gobierno, quedando así los intereses más caros del pueblo y los principios de mayor trascendencia, a la merced de los perros guardianes del jefe del Ejecutivo.¹³

El Plan de la Noria se ocupó también del tema de la Constitución, haciendo hincapié en que los políticos ambiciosos la habían desdeñado en aras de sus muy personales intereses. Afirmaba que esos políticos habían convertido a las

¹² Ernesto de la Torre Villar. *Historia documental de México*. México. UNAM. 1974, 358 p.

¹³ *Ibíd.*

elecciones en una farsa inmoral, corruptora y que menguaban la majestad nacional que se atrevían invocar. Lanzaba la acusación de que se habían relajado todos los resortes de la administración, buscando cómplices en lugar de funcionarios honorables y que se habían derrochado los caudales del pueblo para pagar a los falsificadores del sufragio.¹⁴

El general Díaz, mediante el plan de la Noria, señaló que se habían escarnecido los más altos principios de la democracia, lastimado los más altos principios de la humanidad y burlado los más caros y trascendentales preceptos de la moral. Finalmente, Porfirio Díaz dejó en claro que su lucha era por principios, que no convocaba a ambiciones bastardas, y que el objetivo principal era devolver su imperio a las leyes y a la moral ultrajadas.¹⁵

La insurrección de La Noria habría sido de poca monta, como la mayoría de las ocurridas entre 1867 y 1871,¹⁶ de no ser porque se le unieron muchos de los enemigos de Juárez, que se consideraban afectados por su manera de conducir la administración pública. Los “tejemanejes” de la política mexicana enemistaron a personas y facciones políticas que veían cerrárseles las puertas de los cargos públicos. Muchas de esas personas y facciones se alzaron en armas tras el Plan

¹⁴ *Ibídem.*

¹⁵ *Ibídem.*

¹⁶ Laurens Perry señala que en el año de 1867 estalló una insurrección a nombre de Díaz en el estado de Hidalgo, duró seis meses, aunque este nunca se comunicó con los rebeldes. En 1870 estalló otra asonada con un puñado de coroneles que se pronunciaron contra el gobierno de Juárez y le pidieron al general Díaz que asumiera la presidencia provisional, pero se ha descubierto que Díaz no apoyó ninguna de las sublevaciones anteriores a la Noria. en Laurens Perry. *Juárez y Díaz. Continuidad y ruptura en la política mexicana. op. cit.* p.p. 145-146.

de la Noria. El periódico porfirista *El Ferrocarril* publicaba que las víctimas del poder en los últimos cuatro años eran tan numerosas que no era nada seguro que se quedaran con los brazos cruzados si estallaba la revolución.

Consideramos que no es posible explicar el movimiento de la Noria basados únicamente en el argumento de que Díaz era una persona muy ambiciosa. Haciendo una lectura mas circunspecta es posible apreciar que en ese año el sentimiento antijuarista abarcó a muchos que albergaban los mismos agravios, algunos movidos por una sincera preocupación por la república, a otros los animaba su aspiración al poder local. El caso es que Díaz y los demás sublevados se necesitaban mutuamente. Creemos que a esta hipótesis se le debe dar mayor significación que a la idea de que Díaz buscó por la fuerza de la espada el poder que no pudo ganar en las urnas.

En lo que respecta al rubro militar, a pesar de que lo secundaron caudillos locales de renombre y con recursos, las fuerzas leales al gobierno los batieron batalla tras batalla. Pero fue la muerte de Juárez el factor decisivo en el fracaso de La Noria. El 18 de julio de 1872 falleció el presidente de angina de pecho, y con ello, la revolución había perdido su bandera ostensible¹⁷. Al día siguiente, Sebastián Lerdo de Tejada se convirtió en presidente interino en su calidad de presidente de la Suprema Corte. Apenas una semana después, convocó a

¹⁷ Francisco Bulnes. *El verdadero Díaz y la revolución*. México, Contenido, 1992, p.21.

elecciones presidenciales que debían efectuarse el 13 y 27 de octubre de ese año. Posteriormente, el presidente Lerdo de Tejada expidió su amnistía para acoger a los sublevados.

Desmoralizados, con una carencia de coordinación, y sin una justificación política para continuar con la insurrección, la mayoría de los comandantes de Díaz aceptaron los términos de la amnistía. Este se mantuvo evasivo hasta la aceptación final de la derrota en octubre de 1872. De alguna manera la fortuna política que lo había acompañado hasta entonces, se vio mermada ese mes con la elección casi unánime de Sebastián Lerdo de Tejada como presidente constitucional¹⁸.

Desplazado por Sebastián Lerdo de Tejada, que era un político con menos carisma y prestigio popular que el suyo, el general Díaz se retiró a Tlacotalpan, Veracruz, en donde instaló un taller de carpintería. Durante ese tiempo, Porfirio Díaz no solo se dedicó a construir mesas y sillas, sino que durante este periodo, se convirtió en pequeño empresario, invirtiendo en pequeñas propiedades rurales en varios poblados de Veracruz; asimismo fue representante de ese estado en el Congreso de la Unión en 1874, y al año siguiente el presidente Lerdo de Tejada le ofreció la embajada en Berlín, Alemania, pero la rechazó. Durante estos años se dispuso a trazar un buen plan para alcanzar la silla presidencial, y la coyuntura se

¹⁸ Paul Garner. *Porfirio Díaz. Del héroe al dictador*. México, Planeta, 2003, p. 67

presentó en el año de 1876, por lo que abandonó Tlacotalpan para ir a nueva Orleans y Brownsville, Texas, acompañado de Manuel González, para encabezar la revolución¹⁹.

El plan de Tuxtepec y su reforma en Palo Blanco.

Después de 1867, el antagonismo entre liberales y conservadores dejó de representar la verdadera lucha por el poder. La auténtica disputa se dio entre los liberales. Los vencedores de 1860 eran los viejos republicanos radicales y anticlericales, mientras que los triunfadores de 1867 era un grupo más grande y heterogéneo. Por fuerza debía de producirse una lucha por el poder una vez batido el enemigo común de esa coalición bélica. Para 1876 era ya evidente que había desaparecido lo que quedaba de la homogeneidad que caracterizó al triunfo liberal de 1867. Con la muerte de Juárez, sus partidarios se integraron a otras facciones políticas. Varios, principalmente caciques locales y militares, se unieron a Porfirio Díaz²⁰.

Son varios los motivos por los cuales Porfirio Díaz resultó ser la opción para muchos liberales descontentos en 1876. Era una persona que disfrutaba de una magnífica reputación militar, no tenía largos años de experiencia administrativa, pero los que tenía en su haber, no estaban manchados por el escándalo, existía la percepción de que observaba respetuosamente la legalidad y la constitucionalidad

¹⁹ *Ibídem.* p..267.

y gozaba de una reputación de honradez impecable, todos estos factores lo convirtieron en el abanderado tanto de caudillos y gente de poder, como de varios sectores populares.²¹

A la división del grupo liberal y al disgusto de los militares se sumó el descontento de algunos sectores de la población, a raíz de las medidas anticlericales adoptadas por el régimen lerdistista, el repudio que generó la imposición de una contribución extraordinaria del 25% sobre capitales; además del malestar de varios grupos de poder locales por la tendencia centralizadora de la administración federal. Lerdo de Tejada, lo mismo que había hecho Juárez, impuso a sus candidatos como gobernadores y presidentes municipales en distintos puntos del país.²²

Aparentemente la impopularidad de Lerdo de Tejada iba en aumento. Su postulación como candidato para las elecciones de 1876 se convirtió en la justificación que utilizó Porfirio Díaz para iniciar la revuelta armada, con fundamento en la advertencia final del Plan de La Noria publicado años antes: “Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución”²³.

²⁰ Laurens B. Perry. *Juárez y Díaz. Continuidades y rupturas en la política mexicana. op. cit.* p. 40.

²¹ *Ibidem.* p.51.

²² Luz Carrehga. *La revuelta de Tuxtepec en el estado de san Luis Potosí*, en prensa, p. 54.

²³ Ernesto de la Torre Villar. *Historia documental de México. op. cit.* p. 358

El 1 de enero de 1876, unos meses antes de la realización de las elecciones presidenciales, y de acuerdo con Porfirio Díaz, Hermenegildo Sarmiento - con el título de comandante militar y jefe político del distrito de Tuxtepec, Oaxaca -, suscribió en primer término el Plan de Tuxtepec en la villa de Ojitlán del mismo distrito. En sus “considerandos”, en el manifiesto se desconoció al gobierno lerdistista, invitó al levantamiento armado y expuso las quejas principales contra esa administración.

En su proclama, Sarmiento aseguró que la República Mexicana estaba regida por un gobierno que había hecho del abuso un sistema político, despreciando las instituciones, y acusó a Lerdo de Tejada de haber centralizado el poder en el Ejecutivo de la Unión, violando con ello la independencia del Legislativo y Judicial, a los que según él, había reducido a meros instrumentos del primero. También atribuyó a ese régimen la prostitución de la administración de la justicia, asegurando que había convertido a los jueces de distrito en sus agentes. De igual manera se refirió al Senado, cuya instalación atribuía a Lerdo de Tejada.²⁴

El Plan de Tuxtepec también se refirió al tema de la independencia de los municipios, uno de los reclamos más frecuentes a lo largo de la República Restaurada. Afirmó que el poder municipal había desaparecido y los

²⁴ Ernesto de la Torre Villar. *Historia documental de México. op. cit.* p.365

ayuntamientos solo eran independientes del gobierno para realizar elecciones. Añadió que si bien estos tenían atribuciones para encargarse de las funciones gubernativas en las municipalidades que no eran cabecera de partido y debían actuar como auxiliares del jefe político, la mayoría de las decisiones administrativas y de gobierno eran tomadas por estos últimos, quienes dependían directamente del gobernador, que también los nombraba.²⁵

Respecto a las elecciones, el plan aseguró que se habían convertido en una farsa y acusó a Lerdo de Tejada de imponer a sus candidatos, rechazando a todo ciudadano independiente. Aludiendo tácitamente al caso de Porfirio Díaz.

No escaparon tampoco las reclamaciones por la imposición de contribuciones extraordinarias y la Ley del Timbre decretadas por el gobierno lerdistas. El plan las consideró medidas para extorsionar a los pueblos mientras la instrucción pública se encontraba abandonada, pues según se asentó, los fondos que debían destinarse a ésta iban a parar en manos de los favoritos del presidente. Además, afirmó que el país estaba inmerso en un clima de crisis económica por culpa del Ejecutivo de la Unión, pues el tesoro público se disipaba en gastos de placer y el gobierno no presentaba la cuenta de fondos que manejaba la representación nacional, mientras que los protegidos del presidente

²⁵ *Ibidem.* p. 365-367

percibían tres y hasta cuatro sueldos por empleos que sirven con agravio de la moral pública.²⁶

El país registraba un creciente endeudamiento externo como resultado de las continuas guerras que habían asolado su territorio durante los años anteriores. En 1876 el principal acreedor era Inglaterra, cuya deuda resultaba indispensable reconocer si se quería rehacer el crédito exterior de la república. Los trabajos realizados en este sentido por el gobierno lerdistista también fueron desacreditados en el Plan de Tuxtepec.²⁷

En relación a la inversión extranjera, el plan centró su atención en las negociaciones que la administración lerdistista llevaba a cabo con empresas de otros países. Hizo énfasis en el caso del ferrocarril México-Veracruz, propiedad entonces de una compañía inglesa, a la que acusó de cobrar excesivos fletes; mientras le imputó al gobierno federal la falta de restricciones en las tarifas como causa del estancamiento del comercio nacional y la agricultura.²⁸

Finalmente, el grupo de Porfirio Díaz justificó el levantamiento armado al que invitaba. Aseguró que ese era el único medio para terminar con un régimen que buscaba únicamente su bienestar olvidando el nacional, Lerdo de Tejada destruyó toda esperanza de buscar el remedio a tantos males en la paz por lo que en

²⁶ *Ibídem.*

²⁷ *Ibídem.*

²⁸ *Ibídem.*

nombre de la sociedad ultrajada y del pueblo mexicano envilecido, levantamos el estandarte de la guerra contra nuestros comunes opresores.²⁹

En su artículo sexto, el Plan de Tuxtepec indicó que al triunfo de la revuelta, y en tanto se realizaran elecciones en el país, el Ejecutivo de la Unión se depositaría provisionalmente en el ciudadano que obtuviera la mayoría de votos de los gobernadores de los estados; aunque especificó que dicho funcionario y quienes quedaran a cargo de la autoridad estatal tendrían únicamente atribuciones administrativas.³⁰

El 20 de marzo, el general Porfirio Díaz se proclamó comandante en jefe del Ejército Constitucionalista, conocido también como Regenerador. Al día siguiente, en la población de Palo Blanco, Tamaulipas, al sur de Matamoros, publicó un plan que modificó al de Tuxtepec y fue adoptado a partir de entonces como bandera por sus seguidores. El documento siguió en lo general al de Sarmiento, aunque modificó su articulado e incluyó el apartado sexto del Plan de Reynosa.³¹

Designar al encargado de la Suprema Corte de Justicia, José María Iglesias, como presidente interino de la República respondió al interés que tenía el general Díaz de dar legalidad al movimiento armado que ya encabezaba, pues así se

²⁹ *Ibídem.*

³⁰ *Ibídem.*

³¹ Laurens Perry. *Juárez y Díaz. Continuidades y rupturas en la política mexicana. op. cit.* p.362-365

apegaba al mandato constitucional que otorgaba dicho cargo a quien estuviera al frente del Poder Judicial. Si bien dicho postulado representó un punto de coincidencia con el grupo de José María Iglesias, a quien le ofreció la oportunidad de ocupar el Ejecutivo de la Unión, el magistrado mantuvo silencio frente a la proclama, actitud interpretada por los partidarios de Díaz como un acto de desconocimiento a su causa.

Los iglesistas se opusieron también a la reelección de Lerdo de Tejada. Iglesias se reconoció a sí mismo como presidente de la república en apego a la Constitución de 1857. Su adhesión al Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco habría significado supeditarse al general Díaz, mientras asumir la presidencia interina lo habría dejado sin oportunidad de presentar su candidatura en las elecciones que se prometían realizar al término del movimiento armado, por el principio de no reelección que contenía el artículo segundo del mismo documento³².

El Plan de Palo Blanco tuvo un corte estrictamente liberal. Reconoció la Constitución de 1857, el acta de reforma promulgada el 25 de septiembre de 1873 y la ley del 14 de diciembre de 1874. Además, no obstante ser una de las causas del descontento de algunos sectores de la población, omitió alguna referencia a las medidas anticlericales impuesta por el gobierno lerdistas.³³

³² Paul Garner. *Porfirio Díaz. Del héroe al dictador. op. cit. p.72*

³³ Laurens Perry. *Juárez y Díaz. Continuidades y rupturas en la política mexicana. op. cit. p. 362.*

Por otro lado, además de desconocer a Lerdo de Tejada y a los funcionarios de su gobierno, les negó la oportunidad de ocupar cargos públicos en la administración que se instalaría al triunfo del movimiento armado, excepto a aquellos que se proclamaran en favor de la misma. Lo mismo advirtió a los gobernadores de los estados, a los cuales indicó que serían sustituidos interinamente por funcionarios nombrados por el jefe de armas en tanto se realizaban los procesos electorales en las entidades respectivas.³⁴

En su proclama, el general Díaz ofreció que las elecciones para la instalación del nuevo gobierno se llevarían a cabo conforme a las leyes electorales del 12 de febrero de 1857 y 23 de diciembre de 1872. Las correspondientes para elegir a los encargados de los Poderes de la unión se efectuarían en dos meses después de que fuera ocupada la capital del país, de acuerdo a la convocatoria que expediría el jefe del Ejecutivo luego de un mes de dicha apropiación de la ciudad. Así mismo, al mes de verificarse las elecciones secundarias, entraría en funciones el Congreso de la Unión que daría posesión al Presidente Constitucional de la República y se instalaría la Suprema Corte de Justicia.³⁵

En el Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco, Porfirio Díaz no olvidó referirse al grupo castrense, al que ofreció la oportunidad de integrarse nuevamente a la vida política del país. Conforme al artículo octavo, serían

³⁴ *Ibídem.*

³⁵ *Ibídem.*

reconocidos grados, empleos y condecoraciones de los militares que aceptaran la proclama y se unieran al levantamiento armado.³⁶

Los tuxtepecanos afirmaron que habían tomado las armas en nombre de la sociedad ultrajada y del pueblo mexicano vilipendiado, y con el lema de sufragio libre y no reelección, que se desprendió del artículo segundo del plan como bandera, se lanzaron a la lucha contra el gobierno lerdistista, obteniendo esta vez la victoria sobre las fuerzas leales al gobierno federal, poniendo así punto final a la permanencia de los civiles liberales en la cúspide del poder nacional.

Luego de haber tomado las riendas del país, la nueva administración federal elevó dicho precepto antireeleccionista al mismo rango que las leyes supremas del país; todavía en 1885, en algunos estados de la República, el compromiso que adquirirían los funcionarios al tomar posesión de su cargo rezaba así: “¿Protesta U. guardar fiel y cumplidamente la Constitución General de la República y particular del Estado, Leyes de Reforma y Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco? “. ³⁷

Los objetivos del general Porfirio Díaz en el movimiento de la Noria primero, y en la triunfante revolución tuxtepecana después, eran de índole marcadamente político: la sustitución del titular de la presidencia, el apoyo y promoción de la república federal y del municipio, la defensa del Código político de 1857, la

³⁶ *Ibídem.*

³⁷ Luz Carregha. *La revuelta de Tuxtepec en el estado de San Luis Potosí. Op. cit.* p.65.

honestidad en el manejo de las finanzas públicas, la defensa de las instituciones republicanas y el ataque a la política reeleccionista primero de Juárez y de Lerdo después. Aquí conviene hacer el señalamiento que no se trataba de censurar a la práctica de la reelección indefinida en sí. Lo que el general Díaz criticaba en sus planes era que habían sido reelecciones forzosas y violentas, y que se había hecho uso de ese mecanismo para conservar prácticas abusivas que excluían a otras inteligencias e intereses, evitando así los relevos necesarios en la administración pública.

La redacción e impresión de un plan, era apenas el primer paso para conseguir lo que se proponían sus autores. Estos no actuaban en un vacío social y político; había otros actores en el escenario nacional y local. Por ello, junto a los principios generales consignados en los planes porfiristas, se tenía como objetivo explícito o implícito concitar adhesiones o propiciar desafecciones, propios de toda estrategia política. A partir de la victoria de Tuxtepec, el respeto a las formas legales y el hábil manejo de la política fueron características que paulatinamente se consolidaron con el paso de los años, y constituyeron el sello del régimen que se empezó a construir a partir de la victoria de los tuxtepecanos.

De esta manera el triunfo de la revolución de Tuxtepec dio a Porfirio Díaz la presidencia que anhelaba desde 1867, pero consideramos importante reiterar que no se logró únicamente como el reflejo de una búsqueda tenaz de la ambición

personal, sino que también fue resultado de un apoyo popular importante en las regiones centro y sur de Méxco, y de una preparación militar y política cuidadosa.

Capítulo III.

Entre la prórroga y la reelección.

Con la proclamación del plan de Tuxtepec y sus reformas de Palo Blanco, comenzaba “el reinado de los hombres de Tuxtepec”¹. Porfirio Díaz entraba triunfante a la escena política nacional, donde permanecería por muchos años. Su ascenso a la primera magistratura daría inicio a un proyecto prometedor, que si bien en los primeros años no pudo consolidarse debido a los muchos problemas heredados del pasado, si sentó las bases para importantes cambios políticos, económicos y sociales que habrían de producirse en el futuro.² Entre sus logros políticos se encuentra el respeto a las formas legales y la consolidación de las instituciones políticas propias del liberalismo democrático, como son las Cámaras legislativas.

Así pues, después del triunfo de la revolución tuxtepecana, efectuadas las elecciones donde resulto triunfador Porfirio Díaz, y habiendo transcurrido la primera presidencia de Porfirio Díaz y el cuatrienio de Manuel González³, que

¹ Ramón Prida. *De la dictadura a la anarquía*. México, Editorial Botas, 1958, p. 57.

² Marisa Pérez de Sarmiento. *El cultivo de las élites. Grupos económicos y políticos en Yucatán en los siglos XIX y XX*. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2001, p.59

³ Durante la ceremonia de transmisión de poderes de Manuel González a Porfirio Díaz en 1884, el Gral. González se vanaglorió de la observancia del principio tuxtepecano: “el general González, dirigiéndose a don Porfirio, dijo que el principio revolucionario, elevado después a precepto constitucional se cumple y sanciona por segunda vez”. En José C. Valadés. *El porfirismo: historia de un régimen*. Tomo I, México. Universidad Nacional Autónoma de México, 1976. p. 3

fueron presidencias arrojadas por el principio regenerador de Tuxtepec de no reelección, se comenzó a manejar en ciertos círculos la prolongación de la estadía del Jefe del Ejecutivo. De manera que recién inaugurada la segunda presidencia del general Díaz, en el año de 1885, el *Boletín Militar*, un periódico de carácter oficialista, propuso que se reformara el artículo 78 para ampliar a seis años el periodo presidencial de cuatro.⁴

En un principio, la idea, fue vista por ciertos sectores con sorna y fue motivo de chistes en la prensa,⁵ pero, consideramos que había razones para no tomarse tan a la ligera el asunto, ya que, siendo el *Boletín Militar* un periódico del ejército, habría que considerar su propuesta como profundamente sintomática. Sobre el argumento de que el *Boletín* era un órgano informativo meramente militar, la opinión pública esperó la reacción de *El Partido Liberal*⁶, que reflejaría con una mayor fidelidad el sentir oficial.

El Partido Liberal emitió su opinión al respecto, y aparentemente fue una toma de posición terminante, ya que afirmaba que la democracia mexicana apenas iba prosperando, y por lo tanto no era prudente realizar modificaciones

⁴ Daniel Cosío Villegas *Historia moderna de México. Vida Política interior 1 parte*. México. Editorial Hermes. 1972. p.275.

⁵ Se decía que si a duras penas soportábamos cuatro años a nuestros presidentes, ¿cómo podríamos soportarlos seis? Citado en Daniel Cosío Villegas. *Historia moderna de México. Vida política interior 1 parte. op. cit* p. 276.

⁶ Periódico de clara tendencia oficialista y se consideraba que sus opiniones eran un indicador del sentir del gobierno federal. En Daniel Cosío Villegas. *Historia moderna de México. Vida política interior 1 parte. op. cit*. p. 276.

constitucionales, que podrían llegar a debilitarla. Con esto parecía que se ponía punto final al asunto, pero hubo sectores que consideraron ambiguo tal discurso, ya que apreciaban que en realidad lo expuesto no tenía por objeto combatir la iniciativa, sino que el mensaje en sí, era que los argumentos presentados hasta entonces no eran lo suficientemente buenos.⁷ De modo que, para las personas interesadas en política, a pesar de la declaratoria de *El Partido Liberal*, la puerta seguía abierta para futuras reformas del texto constitucional, concernientes al artículo 78 y 109.

Así pues, por unos meses la opinión pública aparentemente consideró zanjado tal asunto. Pero la cuestión tomó un cariz nuevo e inesperado cuando algunas legislaturas locales acogieron la idea de *El Boletín*, aunque con ciertas modificaciones, ya que ahora, en lugar de convertir el cuatrienio en sexenio, la idea que abanderaban las legislaturas estatales era la de la prórroga del periodo presidencial.

- La propuesta de la prórroga presidencial.

Fue la legislatura poblana la más activa propulsora de la idea de prorrogar el periodo presidencial, y al adoptar esta actitud dio el banderazo de salida para que en otros congresos locales se presentaran propuestas en ese mismo tenor, con el fin de secundar a los legisladores poblanos. De esta manera, se inició de forma oficial la discusión sobre la permanencia del general Díaz en la silla presidencial,

⁷ *Ibídem.* p.276

que en un principio tomó la forma de la prórroga del periodo de gobierno de cuatro años, y que terminó adoptando otro formato, más afín con la legalidad constitucional.

Los diputados poblanos declararon que de acuerdo con las sabias instituciones que regían a la nación, ellos habían procurado empeñosamente facilitar la iniciativa de toda idea de progreso y adelantamiento del país. Así que, de acuerdo con la Constitución general de la República, que entre otros preceptos, contaba con el consignado en el art. 65, que autorizaba a las legislaturas de los estados para iniciar leyes ante la representación nacional, procedieron a dar comienzo al proceso de reforma constitucional. Ese artículo decía: “El derecho de iniciar leyes o decretos, compete: al presidente de la Unión, a los diputados al Congreso general, o a las legislaturas de los estados”.⁸

Y para realizar este precepto en toda su extensión, los constituyentes dijeron en el artículo 127: “La presente Carta Magna puede ser adicionada o reformada.”⁹

Así que haciendo honor a lo anterior, los legisladores de Puebla invocaron con vehemencia esa sacrosanta libertad, consagrada en el marco legal de 1857, y consideraron que sería antipatriota y aun un acto de traición, si hubieran callado por mas tiempo una idea que consideraban era de prosperidad y que traería

⁸ *Constitución de los Estados Unidos Mexicanos*. 1910. p. 36.

bienestar al país. Esta idea se trataba de adicionar el artículo 78 de la constitución general, en el sentido de que el Congreso general de la República estuviera en condiciones de prolongar por dos años más el periodo presidencial, que estaba contemplado para durar cuatro años.

Consideraron que al conservar el periodo presidencial en su término de cuatro años, y mantener prohibida, como ya estaba, la reelección, traía aparejadas sus ventajas y a la vez sus inconvenientes a la patria. Los representantes poblanos presentaron el argumento que para ellos mereció el calificativo de “una verdad trivial”, y que no merecía largas demostraciones: un mal gobernante se hace soportable ante la esperanza de su poca duración, ya que el poco tiempo de su administración no le daría lugar a entronizarse ni a realizar ruinas irreparables, esta era la principal ventaja. El inconveniente era que los progresos sociales son naturalmente lentos, traen la necesidad de remover grandes obstáculos, y todo esto naturalmente requiere tiempo¹⁰.

Por consiguiente, si el país tenía la fortuna de dar con un buen gobernante, es claro que se quedaría en iniciativas, preliminares y ensayos, por más abnegado que se le supusiera y por más relevantes que hubieran resultado sus dotes para gobernar. Los cuatro años de un periodo presidencial resultaban insuficientes

⁹ *Ibidem.* p.55.

¹⁰ José Vicente Villada. *La reelección del presidente de la República y gobernadores de los Estados. Memorándum acerca de la reforma de los artículos 78 y 109 de la Constitución Mexicana.* México. Casa Editorial de José Vicente Villada. 1888. p. 1-11

para iniciar, ejecutar y llevar a su término cualquier idea que hubiera podido engrandecer a la República.

Los diputados de la legislatura poblana afirmaban que este sentimiento reinaba de forma evidente en el espíritu nacional, y que también era claro que la demanda de procurar un remedio era algo imperioso, y este, a juicio suyo, estaba en la adición que proponían. ¿El gobernante que se diera la República no satisficiera sus aspiraciones de progreso y felicidad? Pues ese gobernante duraría cuatro años; al contrario, si fuera probo, recto, diligente y se consagrara por completo a la práctica de todo lo que pueda constituir el bien de la República y de sus conciudadanos, ese gobernante podría durar dos años más rigiendo los destinos del país¹¹.

Referían que estaba fuera de duda que el C. general Porfirio Díaz, ese “humilde ciudadano”¹², había sido uno de los defensores más decididos y entusiastas de las instituciones que regían al país y que había venido defendiéndolas contra todos los ataques y asechanzas que habían tendido a destruirlas, habiendo inaugurado una nueva era de regeneración y bienandanza.

Pero dadas las condiciones en que se hallaba el texto constitucional, apuntaban los legisladores poblanos, la nación se encontraba en absoluta imposibilidad de ser justos con este prominente personaje de la política; pero que además, dicho

¹¹ *Ibídem.*

precepto constitucional orillaba al país a renunciar á su propia utilidad, pues al no poder prorrogarle su período presidencial al general Díaz, el pueblo mexicano no podía aprovecharse por más tiempo de sus innumerables prendas é inmensos beneficios que podría prodigar su juiciosa y recta administración.¹³

Sobre el argumento de que las conciencias se tranquilizarían, se acabarían los temores y se reanimarían más las esperanzas de la patria, la legislatura poblana pedía la prórroga del periodo presidencial. Se afirmaba que al establecerse el principio, adelantaríamos un paso mas en nuestro ser democrático, ya que consideraban los diputados que en dicho sistema tienen su asiento las virtudes cívicas, los sentimientos de gratitud y la justicia; y concluían con la afirmación que en la adición que proponían entraban de lleno estos tres agentes que ejercen tanto poder en la humanidad.

Bajo este concepto, en el Salón de sesiones del Congreso de Puebla, el 29 de marzo de 1886, con su doble título de ciudadano y diputado á esa H. Legislatura por el distrito de Tecali, el diputado M.A. Salas propuso que se iniciara ante la Representación Nacional, la siguiente reforma a la Constitución general:

Artículo 78. Este artículo dirá así: El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre, y durará en él cuatro años, no pudiendo ser reelecto para el periodo inmediato, ni ocupar la presidencia por ningún motivo, sino hasta pasados cuatro años de haber cesado en el ejercicio de sus

¹² *Ibídem.*

¹³ *Ibídem.*

funciones; pero el término presidencial podrá prorrogarse por el Congreso de la Unión hasta por dos años más, bajo el procedimiento que establece el artículo 127.¹⁴

El Congreso del estado de Colima participó también en la discusión de la prórroga al periodo presidencial. En ese sentido afirmó que la iniciativa del respetable Congreso del estado libre y soberano de Puebla, relativa a la reforma constitucional que se proponía del artículo 78 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, acerca de que sea prorrogable el periodo presidencial de la Nación, había sido estudiada con el detenimiento que se merecía por la Comisión de Puntos Constitucionales de esa H. Legislatura¹⁵.

La legislatura de Colima argumentó que las reformas o adiciones no podrían nunca limitar o destruir las garantías individuales, ni los derechos de la sociedad, ni la soberanía del pueblo y las consecuencias de ella; porque esas garantías, esos derechos y esa soberanía, no son concesiones de la ley ni del gobernante, sino verdades eternas e inmutables, simplemente reconocidas por el pacto social y que el gobernante y la ley deben proclamar, defender, respetar y asegurar a pesar de cualesquiera modificaciones¹⁶.

Reconocían los diputados de Colima que las adiciones y reformas constitucionales debían ser de tal manera adecuadas á la conveniencia pública, que no

¹⁴ *Ibídem.*

¹⁵ *Ibídem* p.12-20

¹⁶ *Ibídem.*

destruyeran la Constitución, sino que a través de la reforma se trasluciera, incólume, el principio de legalidad.

Al respecto, la Cámara de representantes de Colima concluía que la iniciativa poblana era procedente, conforme a los principios del derecho constitucional mexicano y que no entrañaba ningún error científico examinada a la luz de las enseñanzas del derecho público¹⁷.

La legislatura de Colima propuso que a la reforma Constitucional de que se trataba, se le hiciera la adición siguiente: “La prórroga sólo podrá proponerse dentro del tercer año del periodo presidencial, pero nunca se hará ni antes del primer periodo de sesiones del Congreso de la unión, ni después del segundo año”.¹⁸

En razón de todo lo manifestado, el 22 de enero de 1887, en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado de Colima, la comisión concluyó su dictamen con la siguiente proposición: “El Congreso del Estado de Colima secunda la iniciativa de la legislatura de Puebla, aprobada en sesión de 29 de marzo de

¹⁷ *Ibídem.*

¹⁸ *Ibídem.*

1886.”¹⁹ Contando con las rúbricas de los diputados Miguel Díaz, Vicente Alfaro y Lucio Uribe.

El Congreso oaxaqueño fue otro de los poderes legislativos locales que tomó parte activa en la discusión de la reforma al artículo 78 constitucional. La Comisión dictaminadora de la legislatura oaxaqueña concluyó que la reforma propuesta por la Cámara poblana estaba de acuerdo con los principios del sistema democrático, que tiende al perfeccionamiento de las sociedades y a su mejor bienestar posible²⁰.

Argumentaron que eran incuestionables las ventajas que a la nación debía producir una reforma constitucional, en el sentido de la que había aprobado la legislatura de Puebla, si, conocido el primer Magistrado por sus honrosos antecedentes, por sus actos durante los primeros años de su ejercicio, por la confianza que en él tenía la misma nación para el porvenir, se acordaba en su favor la prórroga del período presidencial.

No creyó la Comisión necesario ampliar los fundamentos que se habían consignado hasta entonces, porque consideró que en el ánimo de cada uno de sus miembros, existía la plena convicción de que la referida reforma era

¹⁹ *Ibídem.*

²⁰ *Ibídem.* p. 21-24

procedente y debía aprobarse con la adición respectiva para que se fijara el tiempo en que debía proponerse la prórroga. Por esto, y sin entrar en otras consideraciones, no halló inconveniente la misma Comisión en manifestar que aprobaban la iniciativa de la legislatura de Puebla. Por lo que la legislatura del estado de Oaxaca secundó la iniciativa de reforma del artículo 78 de la Constitución general, aprobada por la del estado de Puebla en 12 de enero de 1886, decisión que se tomó en la Sala de Comisiones del congreso oaxaqueño el 18 de febrero de 1887²¹.

El Congreso chiapaneco, al hacer patente su posición frente a la propuesta de la prórroga presidencial, presentó argumentos de legalidad constitucional y señaló que la legislatura del estado libre y soberano de Puebla de Zaragoza, haciendo uso del derecho que á los estados reconocía el artículo 3 de la Constitución, había iniciado ante la Representación Nacional la reforma del artículo 78 del mismo Código, en el sentido de que el período presidencial pudiera, en casos dados, prorrogarse por el Congreso General²².

En efecto, reconocieron que en el código político de 1857, después de la reforma de 1878, en su artículo 78, señalaba cuatro años como término de

²¹ *Ibídem.*

²² *Ibídem.* p.25-28.

duración del Presidente de la República en el ejercicio de su encargo, y prohibía absolutamente la reelección.

Afirmaron que este inconveniente, que pudiera salvarse derogando el principio de no reelección, traería otro de mayor gravedad, á saber: el justo temor de violar a cada paso la libertad del sufragio. No quedaba, pues, más medio que facultar al Congreso general para poder prorrogar el periodo presidencial, como con oportunidad lo había hecho la H. Legislatura de Puebla²³.

En este sentido, argumentaron que esta facultad, legítimamente ejercida por el Congreso general, haría más duradero el poder con beneficio de la sociedad, pues el gobernante tendría más tiempo para dar desarrollo al programa de administración que se hubiere trazado. Con estos fundamentos, en la Sala de Comisiones, con fecha de 16 de febrero de 1887, se acordó que la legislatura del estado libre y soberano de Chiapas aceptaba en todo la iniciativa que la de Puebla de Zaragoza hizo ante la Representación Nacional en 15 de enero de 1887²⁴.

La legislatura yucateca, al exteriorizar su posición con respecto a la prórroga manifestó que la reforma constitucional propuesta por el diputado Salas, á la H. Legislatura del estado de Puebla, y que esa Cámara aprobó el 29 de marzo del

²³ *Ibídem.*

²⁴ *Ibídem.*

año de 1886, así como la adición que ese mismo cuerpo votó en 12 de enero del año de 1887, había merecido el detenido estudio de la Comisión de la legislatura del estado de Yucatán.

Los legisladores yucatecos señalaron acertadamente que era bien sabido que una de las promesas del Plan Regenerador de Tuxtepec, fue la no reelección, cuya promesa se elevó a precepto constitucional con la reforma sancionada el 5 de mayo de 1878. Antes de ésta, la reelección no estaba terminantemente prohibida por nuestra Carta Magna²⁵.

De manera que, siempre en los límites de lo sancionado hasta ese momento, la legislatura yucateca se unía al pedimento de una prórroga de dos años, para aquel que hubiere merecido, por sus trabajos en bien de la República, que se le ampliara el periodo legal para desarrollar y dar forma a sus proyectos administrativos.

Sobre este argumento, los tribunos yucatecos aducían que era insuficiente las más de las veces para los buenos gobernantes un breve periodo en que naturalmente no pueden desarrollar un programa administrativo útil y beneficioso

²⁵ *Ibídem.* p. 29-33.

a los intereses que le están confiados, en atención a que en ocasiones ese periodo apenas les era bastante para conocer a los hombres y a las cosas²⁶.

De acuerdo con esto, referían que la prórroga permitiría utilizar los servicios del gobernante honrado y patriota que haya merecido la confianza nacional por sus trabajos en favor de la prosperidad y engrandecimiento de la República. La prórroga sería un estímulo para los hombres llamados al ejercicio del poder, y procurarían prestigiarse con actos de verdadero civismo²⁷.

Finalmente se dijo que bien pudo haber hecho la Comisión más consideraciones para fundar su dictamen; pero circunscribiéndose á hechos prácticos, no haría más que una última consideración, y que iba en el sentido de que: “el probo y eminente general Porfirio Díaz, que con afán incansable y decidido consagra todo su tiempo al bien de la nación, procurando su buena y adelantada marcha administrativa, apenas en el periodo legal que hoy rige, tendrá tiempo para iniciar otros trabajos en bien de la República,”²⁸ además de los que tenía emprendidos sin que pudiera verlos realizados; trabajos de significación y trascendencia que en el breve término que le quedaba no podría concluir, y tal vez no llegarían a un éxito feliz con su separación de la Presidencia.

²⁶ *Ibídem.*

²⁷ *Ibídem.*

²⁸ *Ibídem.*

Por lo tanto los diputados estatales pedían la continuidad del gobierno porfirista, que, cuidadoso de las formas constitucionales, empleó el poder de su gobierno personal, en el desarrollo de las fuerzas productoras del país, en construir la nación materialmente, en formar primero y afirmar después el crédito público, “como si su obra reflejara en el exterior, el carácter y las virtudes privadas del hombre que las dirigía”²⁹.

Basados en tales fundamentos, la XI legislatura del estado libre y soberano de Yucatán, decidió ratificar en todo la iniciativa de la H. Legislatura de Puebla, relativa a la reforma del artículo 78 de la Constitución general de la República, tomándose tal decisión el 10 de marzo de 1887.

En virtud de lo anterior, la iniciativa poblana y las adhesiones que concitó llegaron oficialmente a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por lo que finalmente se tuvieron que ocupar del asunto. Se manejaron varios escenarios; desde que la Comisión Permanente devolvería la propuesta sin considerarla mayormente, hasta que siendo la prórroga una solución cómoda, el Congreso terminaría por adoptarla.

²⁹ Emilio Rabasa. *La evolución histórica de México*. México, Porrúa, 1956, p. 103.

En nuestra opinión, la propuesta de la prórroga era inaceptable, porque se desviaba del carril constitucional por el que el presidente Porfirio Díaz había decidido encaminar a la nación. Por más que se argumentara, siempre daría por resultado una evidente usurpación del derecho a elegir, que en los sistemas republicanos y democráticos solo es otorgado al pueblo. De manera que las Cámaras de la Unión y las legislaturas de los estados tendrían que convertirse en grandes clubes electorales; pero sus votos no tendrían fuerza ni mandato popular ninguno, porque en una democracia representativa no son los diputados o los senadores los que tienen poder del pueblo para elegir nuevo Presidente, ni para prorrogar el periodo del que está en ejercicio de su mandato.

La tarea del poder legislativo es , precisamente, legislar, pero no elegir, porque entonces estarían asumiendo de improviso, por sí y ante sí, la soberanía nacional, que en la constitución de 1857 estaba reservada al pueblo.³⁰ Y la prórroga en último análisis, no habría sido más que la elección de un Presidente para el periodo de dos años.

Por otra parte, desde el momento en que la prórroga se estimara como una recompensa concedida al Jefe del Estado, por su buen manejo del poder, Cámaras y Presidente se habrían colocado en una situación bastante incómoda,

³⁰ La soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales y de adoptar la forma de gobierno que más le convenga. Es un artículo que viene de la Constitución gaditana, pasó

ya que negar la prórroga habría sido igual a dar un voto de censura al gobernante, “y aun el no proponerla en lo sucesivo, equivaldría a inferir muy grave ofensa al Presidente, considerándole indigno del premio que mereció y obtuvo su antecesor.”³¹

De modo que, de haberse aprobado tal reforma, habría surgido irremediabilmente una mayor y constante presión e injerencia del Ejecutivo en las Cámaras, porque dependiendo de éstas la concesión de esta recompensa, que una vez dada a uno sería bochornoso para los otros no obtener, lógico es que no desperdiciaría medio de contar siempre con una mayoría compacta, incapaz de negarle su pleno voto de confianza. Y por fuerza esta mayoría debía trocarse en casi la totalidad del Congreso, porque según la iniciativa que venimos hablando, la prórroga hubiera requerido para ser admitida, el voto de las dos terceras partes de los representantes populares.

Por lo tanto, la prórroga era una especie de periodo presidencial de seis años; pero un periodo de seis años anormal, con dos años que no cuadraban del todo con la teoría de un régimen democrático, donde el pueblo es quien elige a sus gobernantes. Las Cámaras se habrían convertido en una especie de mitad del pueblo con facultad de elegir medios presidentes. No podían elegir a un

íntegro a la Constitución de 1824 y a la de 1857. En Luis Medina Peña. *Invencción del sistema político mexicano*. México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 44.

presidente para que se encargara del poder Ejecutivo por un periodo de cuatro años, pero sí pretendían estar facultados para nombrar a un mandatario para ejercer el poder por dos años. Por todo esto, nos parece que la prórroga al periodo presidencial no era la vía más idónea para prolongar, con la bendición de la legalidad, la permanencia del general Díaz al frente de la administración federal.

El Congreso resolvió desechar la idea de la prórroga presidencial, pero, si bien se rechazó ésta iniciativa por la imposibilidad constitucional de que las Cámaras eligieran por dos años complementarios a un presidente, estando reservada la función electoral al pueblo mismo, también se abrió la posibilidad de que si se llevara a cabo, a fin de cuentas, una reforma al artículo 78, pero no para ampliar el periodo presidencial, sino para permitir la reelección inmediata del Presidente de la República y de los gobernadores de los estados.

Mientras tanto, la prensa capitalina opinaba al respecto que no era posible consumir una brusca transición entre las condiciones que imprimió al gobierno la revolución de Tuxtepec, y hacerlo retroceder hasta el estadio que guardaba la República al elaborarse su Constitución en el Congreso Constituyente, y durante las reelecciones del presidente Juárez. Se comentaba en sus páginas que era preciso no olvidar que la iniciativa de prolongar el mandato presidencial emanó de la convicción de que el periodo de cuatro años era insuficiente para que el primer

³¹ José Vicente Villada. *La reelección del presidente de la República y los gobernadores de los estados. Memorándum acerca de la reforma de los artículos 78 y 109 de la Constitución*

Magistrado pudiera plantear y desarrollar todo un sistema administrativo de progreso y adelanto. Pero asimismo aseveraba que la formula de la prórroga era inaceptable, ya que al país lo regían instituciones republicanas, según las cuales el gobierno es puramente representativo, y como tal, su nombramiento debía emanar del pueblo.³²

- La propuesta de reelección inmediata.

Rechazada la iniciativa poblana, fue la legislatura de Jalisco la que tomó la estafeta, y el 25 de marzo de 1887, propuso que en lugar de extender por dos años adicionales el mandato presidencial, la recompensa al buen gobernante fuera la reelección por un periodo completo de cuatro. El 7 de abril de 1887, varios legisladores pertenecientes a la XIII legislatura, iniciaron en la Cámara de Diputados el proceso para aprobar la reelección inmediata del presidente y los gobernadores³³.

Cabe señalar que el 1 de abril de 1887, el presidente Porfirio Díaz leyó con toda oportunidad su informe ante el Congreso de la Unión, sin hacer alusión del asunto de su permanencia al frente del poder Ejecutivo. El silencio del mandatario ante un tema de semejante importancia levantó reproches y suspicacias. Pero lo

Mexicana. op. cit. p.356.

³² “La reelección en la Cámara”. En *El siglo XIX*, 21 de abril de 1887.

³³ Daniel Cosío Villegas. *Historia Moderna de México. Vida política interior. 1 parte. op cit. p.276.*

cierto es que el Jefe del Ejecutivo nada tenía que decir en su mensaje ni de prórroga ni de reelección, porque no estaba obligado por ley, ni había sido el Ejecutivo el que inició formalmente las propuestas de reforma³⁴. En última instancia, el primer Magistrado de la Nación, en este caso el general Díaz, solo tenía obligación de dar cuenta al Congreso, al abrir éste sus sesiones ordinarias, de la situación que guardaba el país. No era, pues, menester que expresara sus opiniones personales.

Es importante destacar que después de las oscilaciones ya mencionadas por las que atravesó la iniciativa para prolongar la permanencia del Ejecutivo Federal, se depositó al fin en la mesa de la Cámara de representantes, un proyecto de ley firmado por diputados que habían pertenecido á las diferentes fracciones en que se había dividido el partido liberal.

Allí, en efecto, se veían aglomerados los nombres de los que habían defendido la reelección del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, de quienes combatieron en el movimiento iglesista, y de aquellos que simpatizaron con la revolución porfirista.

³⁴ Díaz estaba interesado en que no se le acusara de manipulación electoral y se aseguró que la iniciativa no emanara de la presidencia, sino de las legislaturas estatales, y ratificada por el Congreso Nacional. Paul Garner. *Porfirio Díaz. Del héroe al dictador*. México, Planeta, 2003. p.108

En ese documento parlamentario vemos entre las firmas que lo cubren, las de tres secretarios de Estado de los tres gobiernos que protagonizaron los sucesos de 1876. Podemos leer los nombres de Juan José Báez, último ministro de Gobernación del presidente Sebastián Lerdo de Tejada; de Alfonso Lancaster Jones, ministro del efímero gobierno de José María Iglesias; y de Trinidad García de la Cadena, secretario de Gobernación, y después de Hacienda del general Porfirio Díaz en su primer periodo presidencial, y por último Alfredo Chavero, quien presidió la Comisión que en el primer Congreso erigido al triunfar el Plan de Tuxtepec, dictaminó la reforma de los artículos 78 y 109 constitucionales, prohibiendo la reelección presidencial, y que a su vez, en 1887, encabezó la Comisión que propuso que se pudiera reelegir al presidente de la República por una sola vez.

Estos singulares cambios de criterio político de los personajes arriba mencionados, más que interpretarlos como veleidades mal intencionadas y contrarias a la rectitud, debemos ubicarlos dentro del contexto de la política de conciliación que fomentó el presidente Porfirio Díaz durante su administración. El mismo general Díaz expresó muy bien los lineamientos de tal política, “atraer y contentar a los individuos que pueden formar centro, asimilando elementos que parecían sinceros, éste es mi trabajo.”³⁵

³⁵ Carta de Porfirio Díaz a Bernardo Reyes. Citada en Luis Medina Peña, *Invencción del sistema político mexicano. op. cit.* p.273.

El general Díaz admitió en su aparato administrativo de gobierno a los principales lerdistas, conservó a los amigos del ex presidente González, admitió no solo civiles del imperio, sino también generales que habían militado contra la república, procuró contentar a los exclusivistas de Tuxtepec, y no rechazó siquiera a algunos hombres que personalmente lo habían perseguido en otra época. Al cabo de algún tiempo, la unión estaba en la persona del general Díaz, de cuya mano pendía la posición de cada individuo. “No tengo en política amores ni odios”³⁶, decía el Héroe de la Paz.

De tal manera que en la sesión del día 12 de abril de 1887 fue presentado el proyecto de ley para permitir la reelección inmediata del Ejecutivo Federal y de los ejecutivos locales, por parte de las Comisiones Unidas 1ª de Puntos Constitucionales y 1ª de Gobernación. La iniciativa presentada por varios diputados, para reformar los artículos 78 y 109 de la Constitución, respondía en concepto de las comisiones mencionadas, a una necesidad pública y perfeccionaba el sistema comprendido en esos artículos, que a su vez fueron reforma de los primitivos correspondientes de la carta fundamental de 1857.

En dicho proyecto de ley, se hacía referencia a que los autores del Código político de 1857 habían sabido prever que la necesidad de perfeccionarlo habría de llegar, según los tiempos y las circunstancias, y por eso consignaron en su

³⁶ Emilio Rabasa. *La evolución histórica de México*. op. cit. p. 102.

artículo 127, la manera de verificarlo constitucionalmente, sin alterar la legalidad imperante en la República.

A este propósito, las Comisiones consideraron conveniente citar las siguientes palabras del manifiesto dado al pueblo mexicano por el Congreso Constituyente de 1857, cuando se publicó la Ley Fundamental en ese año:

El Congreso sabe muy bien que en el siglo presente no hay barrera que pueda mantener estacionario a un pueblo, que la corriente del espíritu no se estanca, que las leyes inmutables son frágil valladar para el progreso de las sociedades, que es vana empresa querer legislar para sociedades futuras, y que el género humano avanza día a día, necesitando incesantes innovaciones en su modo de ser político y social.³⁷

Por estas razones, los constituyentes de ese tiempo habían dejado abierta la posibilidad de reformar el marco legal, sin más precaución que la seguridad de que los cambios fuesen reclamados y aceptados por el pueblo.

En el seno del Congreso se congratulaban, y a la vez felicitaban al pueblo mexicano, de que surgieran reformas a la Constitución de 1857 dentro de la paz, a la que, con razón, consideraban el primero de todos los bienes, y sobre todo, por

³⁷ *Diario de debates de la XIII legislatura.* p. 530-533.

los medios legales que la misma Constitución consignaba en su artículo 127, el cual decía a la letra:

La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones ó reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por las legislaturas de los estados.³⁸

De esta manera, el pueblo aceptaba y sancionaba la reforma, pues como dice el manifiesto citado; el pueblo legisla, al pueblo corresponde reformar y variar sus instituciones; pero siendo preciso por la organización, por la extensión de las sociedades modernas, recurrir al sistema representativo, el poder legislativo es al que le corresponde hacer la reforma; contando con las dos terceras partes de sus votos, y concurriendo también el poder legislativo de los estados.

En lo que respecta a la reforma constitucional que en este trabajo nos ocupa, diremos que los constituyentes de 1857, basados en el axioma político de que todos los poderes se derivan del pueblo, no pusieron límite a la reelección del presidente, dejando en el artículo 78 de la Constitución la más amplia libertad al pueblo para decidir de sus destinos.

³⁸ *Ibídem.*

Los diputados que presentaron el proyecto de reforma a los artículos 78 y 109 aceptaron que, sin duda, esta era la idea más democrática; pero, también apuntaron que más tarde surgieron divisiones en el partido liberal. En el documento citado, hacían hincapié en que este antagonismo nunca afectó los principios políticos, que habían sido siempre la común bandera del liberalismo, sino más bien dichas diferencias se manifestaron en la aplicación de tal ideario, provocando algunos accidentes; siendo acaso el principal de ellos, el deseo de prohibir la reelección del presidente de la República. Los sucesos políticos trajeron el triunfo de tal anhelo; y señalaban que fue muy honroso para el gobierno emanado de la revolución de Tuxtepec, el haber entrado inmediatamente después de su victoria en el orden constitucional, y no haber basado en el éxito de las batallas la proclamación de la idea antireeleccionista, sino sujetarla como reforma á los procedimientos marcados en el artículo 127 de nuestra Constitución.³⁹

Los legisladores calificaron como un argumento de peso las citadas diferencias, y por lo tanto las circunstancias no permitían tomar en consideración la idea reeleccionista durante el periodo tuxtepecano. Más, transcurridos diez años y muertas ya las pasiones dominantes de aquella época, apareció de nuevo, y en la forma más oportuna, en la mesa de discusión la polémica sobre la reelección presidencial. Inútil consideraron las Comisiones insistir en un punto para ellas claro, y solamente se refirieron a la práctica de otras naciones, porque argumentaron que siempre había que aprovechar las enseñanzas de la historia; y

³⁹ *Ibídem.* p.530-533

en el presente caso expusieron como ejemplo a las dos repúblicas más poderosas del mundo de ese momento, los Estados Unidos y la República Francesa⁴⁰.

Presentaron la tesis de que los Estados Unidos, siempre que lo habían creído conveniente, habían reelecto a su presidente. Ejemplificaron dicha idea con el caso del general Grant, que habiendo sido nombrado para ese alto puesto, después de la tremenda guerra separatista, no le hubieran bastado cuatro años para consolidar la paz y organizar la administración, y el pueblo americano, esencialmente libre y esencialmente práctico, lo reeligió, prorrogándole así su periodo presidencial por cuatro años⁴¹.

En lo que respecta a la República Francesa, los tribunos mexicanos, partidarios de la reelección presentaron el argumento de que al término de el septenado del presidente Grevy, su separación del poder habría dado lugar a profundas divisiones en el partido nacional, habría trastornado la paz en el interior, y había sin duda sido la señal de una desastrosa guerra extranjera; y el pueblo francés opto por la reelección, para conservar los bienes inapreciables que le dan la paz y su propia grandeza⁴².

⁴⁰ *Ibídem.*

⁴¹ *Ibídem.*

⁴² *Ibídem.*

Ya casi para finalizar el documento, los diputados consideraron que era natural que la iniciativa propusiera también la reforma al artículo 109 de la Constitución, que trata sobre la forma de gobierno de las entidades federativas, ya que los gobiernos de los estados debían adoptar el mismo principio democrático.

En consecuencia, sujetaban á la deliberación de la Cámara el siguiente Proyecto de Reforma de los artículos 78 y 109 de la Constitución:

Artículo 78. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre, y durará en él cuatro años, pudiendo ser reelecto para el periodo constitucional inmediato, pero quedará inhábil enseguida para ocupar la presidencia por nueva elección, á no ser que hubiesen transcurrido cuatro años contados desde el día en que cesó en el ejercicio de sus funciones.⁴³

Artículo 109. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, y determinarán en sus respectivas constituciones los términos en que deba aplicarse á la reelección de sus gobernadores, lo que prescribe el artículo 78 para la del presidente de la República.⁴⁴

Así pues, dicho proyecto fue firmado en la sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 11 de abril de 1887 por los diputados: Alfredo Chavero, Juan José Báez, Alfonso Lancaster Jones, Ignacio Pombo,

⁴³ *Ibídem.* p. 530-533.

⁴⁴ *Ibídem.*

Trinidad García de la Cadena, y A. Castillo, quedando abierta la discusión en la Cámara de Diputados, donde los legisladores mexicanos tuvieron ocasión de mostrar sus grandes dotes oratorias y argumentativas, siendo tal debate la parte central de este estudio.

Capítulo IV.

La discusión en la Cámara.

Esta revisión y análisis de la controversia legislativa desatada en la Cámara de Diputados en 1887, con motivo de la propuesta de reforma constitucional para permitir por una sola vez la reelección del presidente de la República y a los gobernadores de los estados, pone de manifiesto que las elecciones jugaron un papel importante en la vida política del México porfiriano. Pero hay que estar muy conscientes que no necesariamente las elecciones eran ejercicios efectivos para elegir autoridades, sino que más bien cumplían el papel de ser rituales políticos y detonadores de interesantes debates – como lo podremos ver más adelante - ; asimismo fueron objeto de discusión, a veces apasionada ,en la prensa de la época.¹

Así pues, conforme a la tesis de que en los países democráticos el pueblo gobierna para el pueblo, el pueblo legisla y el pueblo puede reformar sus instituciones, el día 19 de abril de 1887, con la asistencia de una multitud compacta en el salón de sesiones², dio inicio en la Cámara de Diputados, el debate para decidir la suerte de la iniciativa que proponía la reelección limitada del Jefe del Ejecutivo, el general Porfirio Díaz Mori.

¹ María Eugenia Ponce Alcocer. *La elección presidencial de Manuel González*. México, Universidad Iberoamericana, 2000, p. 1.

² “La situación”, en *El Siglo XIX*, 29 de abril de 1887.

Las actitudes que asumieron los diputados frente a la iniciativa fueron desde el apoyo irrestricto hasta la oposición sin cuartel, aunque esta última tuvo una muy especial característica, como podremos apreciar más adelante. A los tribunos de la XIII Legislatura, su tarea les obligaba a asumir una posición crítica ante la propuesta de reforma constitucional. Desde esta perspectiva, los diputados trataron de tomar distancia frente al poder y sus acciones, como única forma de someterles a un examen sistemático y objetivo, pese a que, en la realidad, los estudiosos de las ciencias sociales sabemos que la objetividad total es imposible.

En esta XIII legislatura, se encontraban representadas las familias y los grupos que ejercían el poder con el presidente y los gobernadores, eran miembros de aquellos clanes familiares poderosos por la influencia política o por la fortuna, como por ejemplo José Ives Limantour y Joaquín Casasús, sin cuya existencia el sistema político porfirista sería incomprensible, pero, no era una Cámara en donde solo estuvieran presentes el dinero y la influencia política, estos personajes eran a la vez, también una representación de las elites de la inteligencia.³

Así pues, dotados de una gran brillantez, los hombres pertenecientes al XIII Congreso de la Unión, hicieron gala de su oratoria, de sus conocimientos jurídicos, de su erudición literaria, de su respeto al Presidente Díaz, y en medio de

³ Francois Xavier Guerra. *México: del antiguo régimen a la revolución*. México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p.113

reiteradas apologías a la paz y al orden⁴, el 19 de abril de 1887, el diputado Juan A. Mateos abrió la disputa legislativa, expresando en la máxima tribuna legislativa el dolor que le causaba constatar que dos constituyentes de 1857 hubieran firmado la propuesta de reforma constitucional puesta a debate. Argumentando que él respetaba más aquellas firmas puestas con una mano viril en 1857, que las firmas temblorosas de 1887.⁵

Posteriormente habló en pro del dictamen el diputado Francisco Romero⁶, quien dijo que en el ánimo de muchos reinaba la idea que en vista de que la no reelección fue la bandera del Plan de Tuxtepec, no debería reformarse, y que por lo tanto, los que así lo consideraban, le atribuían carácter eterno e inmutable.

Adujo que no había medio más seguro para que la no reelección cayera por tierra, que el pretender imprimirle ese carácter; ya que ni en la historia toda del mundo podía hallarse ejemplo más elocuente de la fragilidad de lo inmutable, - según el diputado Romero -, que estudiando la suerte de la Revolución Francesa del año de 1891 y su Carta Magna. Esta Constitución no debía reformarse- de acuerdo a la erudición del diputado en cuestión - sino hasta pasados 30 años después de publicada. Duró dicha Constitución sólo seis meses, y los treinta años,

⁴ José C. Valadés. *El porfirismo: historia de un régimen*. Tomo 1. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1976, p.35-36.

⁵ *Diario de los debates de la XIII legislatura*. p. 547-566.

⁶ Nativo de Tulancingo, Hidalgo. Autor de varios discursos pronunciados en solemnidades públicas, representó en el Congreso, en distintas ocasiones, a los estados de Yucatán, Hidalgo y Jalisco. en *Documentos parlamentarios*. México, Secretaría de Fomento, 1888, p. 209-237.

durante los que debía ser inmutable, sufrió la Francia seis revoluciones, y otras tantas Constituciones la rigieron.⁷

El tribuno en cuestión coincidió en que la bandera del Plan de Tuxtepec fue esta partícula negativa, “No”. Pero esta palabra “no” fue protesta contra todo un sistema de cosas que había cambiado ya para 1887, y contra el que por consiguiente ya no tenía sentido alguno protestar. La bandera tuxtepecana venía a tierra por sí sola.

Así que conforme a los razonamientos de Francisco Romero, los que se oponían siempre a las reformas, no era verdad que temieran volver atrás, lo que temían era ir hacia adelante. Lo que querían era que el país se petrificara, que la humanidad no marchara y detener el porvenir.⁸

El diputado Romero concluyó su peroración con la elocuente súplica de no convertir a la sentencia de Tuxtepec en loza de sepulcro. Exhortó al pleno de la Cámara a decretar la reforma, para devolver al pueblo su esperanza, destruyendo así con mano firme esa inscripción fatídica y terrible como la del infierno del Dante, para cumplir así con el alto encargo de representantes del país.⁹

⁷ *Diario de los debates de la XIII legislatura*, p. 547-566

⁸ *Ibídem.*

⁹ *Ibídem.*

Siguiendo el orden de la sesión, habló el diputado Porfirio Parra¹⁰ en contra del dictamen. Comenzó su exposición preguntando a los miembros del Congreso: “¿No es extraño que en vez de proclamar con los hombres de la Constitución y de la Reforma, la más amplia libertad de elección, dejan subsistir una media traba, una semi- restricción tan defectuosa en el terreno de los principios liberales, como llena de inconvenientes en el terreno de la práctica?”¹¹.

Hizo referencia a que la base de nuestra Constitución es la voluntad del pueblo mexicano, y que por tanto todo lo que pusiera trabas al ejercicio y a la manifestación de esa voluntad, debía considerarse en pugna con el espíritu del Código Político, y suponerse inspirado no por la ninfa Egeria, de los intérpretes de las voluntades públicas, sino sugerido por esas ofuscaciones que perturban los ánimos más serenos, como los nublados encapotan los cielos más puros.¹²

El diputado Porfirio Parra reconoció la pertinencia en la Constitución, ya que no violaban su espíritu, de aquellas restricciones que garantizaran la aptitud para gobernar, aquellas que se requirieran para tenerle por un hombre maduro y dotado de amor a la Patria. De manera que para dicho legislador eran aceptables en la Constitución restricciones, que, como las citadas, afectaban a la esencia del

¹⁰ Fue diputado suplente por el distrito de Paso del Norte, fundó las revistas filosóficas quincenales el *Método* y el *Positivismo*. Perteneció a casi todas las sociedades médicas de la capital y a la de Geografía y Estadística. En la XIII legislatura fue diputado suplente por el distrito de Parral. en *Documentos parlamentarios, op. cit*, p. 209-237.

¹¹ *Diario de los debates de la XIII legislatura*. p. 547-566

¹² *Ibídem*.

asunto; no podían caber aquellas que son meramente accidentales y de detalle, como consideraba precisamente al sistema de la no reelección.

Sobre el argumento de que el pueblo mexicano es libre para fijarse en quien quiera y confiarle el timón de los destinos públicos, Porfirio Parra cuestionó si se le habría de quitar ese derecho al pueblo sólo porque el candidato en cuestión estaba ejerciendo la Presidencia de la República. Y siguiendo el hilo de estas consideraciones, el diputado fue más allá y afirmó que el principio de la “no reelección”, era tan ilógico en sus bases, como opresivo y anti democrático en sus tendencias.¹³

Afirmó que es una máxima de sentido común, que el ejercicio perfecciona las facultades á el consagradas; y que es una verdad al alcance de todos, que el mejor modo de saber si un ciudadano es apto para ejercer un cargo público es vérselo desempeñar.¹⁴

Por lo tanto la no reelección era un principio que parecía fundarse en máximas contrarias a las expuestas por el diputado Parra, ya que prohibía al pueblo confiar sus destinos precisamente al hombre que quizá los había guiado con acierto. El tribuno lanzó al pleno la siguiente pregunta “¿Que diremos de una

¹³ *Ibídem.*

¹⁴ *Ibídem.*

restricción que prohíbe que siga gobernando el hombre que al hacerlo, puede haber dado mil pruebas de actividad, patriotismo y egregias virtudes cívicas?”.¹⁵

Así que a raíz de las consideraciones expuestas por el diputado Parra, se puede deducir que la restricción de que hablamos, pugnaba con el espíritu democrático de la Constitución, con arreglo al cual el pueblo mexicano no puede exigir de su candidato otras circunstancias que las que garantizan que posea las más elementales aptitudes para gobernar.

El legislador Parra, con acertado tino, cuestionó a sus compañeros diputados, sobre el asunto de que si la reelección era buena en principio, ¿por qué no habrían de permitirle también dos, tres o cuantas veces fuera preciso? ¿Sería acaso la reelección uno de esos remedios heroicos de la política, que como los alcaloides en medicina salvan al enfermo, dados en cortas dosis, y le matan propinados con largueza?¹⁶

El tribuno Parra se permitió leer uno de los últimos párrafos de la parte expositiva de la iniciativa, para dejar en evidencia que existía confusión en dicha propuesta, causando la poca armonía que se advertía, según él, entre la conclusión y las premisas. El párrafo a que se refirió, dice así: “ Nosotros no

¹⁵ *Diario de los debates de la XIII legislatura* p. 547-566

¹⁶ *Ibíd.*

deseamos otro bien para nuestra Patria; queremos la reelección por un nuevo periodo constitucional, pero no la perpetuidad en el poder.”¹⁷

Demostrando así algo que consideramos importante de destacar, y es que los autores de la propuesta reformista hacían de la reelección ilimitada y de la perpetuidad en el poder una misma cosa. En unión con el diputado Parra, creemos que tal identificación es errónea, por la razón de que podía suceder que el abuso de la reelección trajera como consecuencia la perpetuidad en el poder; pero aunque esto último podía provenir de lo primero, siempre serán dos hechos enteramente distintos: el de otorgar al pueblo la facultad de reelegir al primer Magistrado de la Nación; y el que éste se eternice en el poder. Los legisladores, al formular una ley, no se tenían que fijar en el abuso que de ella pudiera hacerse, esgrimió el representante Parra, pues la misma Constitución señalaba medios para prevenir y corregir tales abusos.¹⁸

Señaló que las Comisiones Unidas, en su loable afán de conciliarlo todo, no dejaron de ver que se colocaban en ese terreno resbaladizo en que ni se proclama la libertad, ni se impone la restricción; no advirtieron que adoptando temperamento tal, descontentaban en vez de satisfacer a los grupos políticos basados en las opiniones extremas que las Comisiones quisieron adular.

¹⁷ *Ibídem.*

¹⁸ *Ibídem.*

Con gran acierto Porfirio Parra puso de manifiesto que la Constitución de 1857 proclamó la más amplia libertad de elección, sin más restricciones que las más indispensables, para garantizar la aptitud del candidato. Y enseguida se hizo la siguiente pregunta ¿Se podrá decir lo mismo del dictamen de las Comisiones?. Para concluir que de ninguna manera; en el dictamen se comienza por reconocer que la reelección es buena en principio, y luego se le restringe, permitiéndole solo una vez, poniendo el ilustrativo ejemplo que lo cual es tanto como permitirle andar a un hombre con la condición que no de más de un paso.

Finalmente concluyó con el exhorto de que la Cámara debía rechazar dicho dictamen porque no correspondía a ninguno de los sistemas definidos que en este particular se disputaban la opinión pública, porque no era constitucionalista neto, ni anti-reeleccionista franco; porque en vez de satisfacer las exigencias de los partidos extremos los irritaba y exaltaba, prometiendo a los unos una libertad imaginaria, y ofreciendo a los otros una garantía ilusoria.¹⁹

En la sesión del día 20 de abril de 1887 tomó la palabra el diputado en pro del dictamen, Gustavo Baz²⁰. Comenzó el debate con la afirmación de que el Sr. Porfirio Parra basaba su raciocinio en este principio: “la soberanía del pueblo es ilimitada”.

¹⁹ *Ibídem.*

²⁰ En 1876 fue electo diputado al VIII Congreso, pero el triunfo de Tuxtepec le impidió tomar posesión de cargo, en noviembre de ese año acompañó a Sebastián Lerdo de Tejada en su peregrinar, colaboró en el servicio exterior, en el año de 1886 fue electo diputado al XIII Congreso de la unión por uno de los distritos del estado de México. *Documentos parlamentarios*. op. cit, p. 209-237.

Con cierta dosis de ironía admitió que le había sorprendido grandemente esa teoría de los poderes ilimitados en un discípulo de Gabino Barreda, y que además alardeaba de pertenecer a la escuela positivista. Insistió en llamarse sorprendido porque sabía que el único principio absoluto que proclamaba esa escuela, en cuyo nombre enseñaba el señor Parra, es el de que no hay principios absolutos, es decir que todo es relativo. De manera que refirió parecerle extraño, que un positivista se presentara ante el pleno a sostener que hay poderes ilimitados en materia política.²¹

Para Gustavo Baz, los principios absolutos no eran la regla fija e invariable por la que debían guiarse en las aplicaciones de la política. Con vehemencia lanzó la afirmación de que cuando una Constitución consigna ampliamente ideales absolutos, es porque ha sido hecha de seguro, en una época revolucionaria y de lucha, ganándose una fuerte ovación de los asistentes a la sesión.

En cuanto al tema de la lucha tuxtepecana, que comenzaba ya a tornarse muy polémico, el diputado Baz tuvo la temeridad de calificar de accidente histórico a la Revolución de Tuxtepec, y de ser fruto del convulso siglo XIX. ¿Qué deseaba esta revolución? se preguntaba con elocuencia el tribuno Baz, pues la no-reelección, pero su base, su principio, era evitar la perpetuidad en el poder.

²¹ *Diario de los debates de la XIII legislatura.* p. 566-600

Ya entrado en la dinámica de disminuir al movimiento de Tuxtepec, el diputado Gustavo Baz lo declaró, para esas alturas, falto de vigencia, ya que según el legislador arriba mencionado, desde el momento en que su caudillo se sometió a las prácticas constitucionales, e hizo del ideal o de lo que proclamaba su partido una reforma constitucional, a partir de ahí se había vuelto a la vida normal de la sociedad, y ya instalados en 1887 en esa vida normal, no podía echarse a nadie en cara que no se persiguieran los ideales del estado anormal que produjo aquel accidente histórico.²²

Sobre el mismo argumento declaró que la Representación Nacional no tenía que hacer gran caso a la revolución de Tuxtepec, ya que eran los representantes de un pueblo que vivía en plena paz. Y en virtud de una Constitución que se declaraba a si misma reformable, podían todos sin compromiso alguno ver si les convenía ó no, reformar esa Constitución, aún cuando en un momento dado de nuestra historia se hubiera proclamado en los campos de batalla.²³

Invocando el interés patriótico y presentando como argumento que la experiencia había venido a demostrar que el periodo presidencial de cuatro años para una buena administración, podía ser muy corto, y puede ser muy largo si la administración es mala, hizo el llamado para que se le concediera al pueblo la libertad de ampliar ese periodo presidencial; pero también, como sus

²² *Ibídem.*

²³ *Ibídem.*

representantes, estaban obligados a asegurar su porvenir, estableciendo el mecanismo de la reelección limitada, para que el abuso no llegara a entronizarse. Finalmente Gustavo Baz concluyó su intervención aduciendo que el dictamen que estaba a discusión tenía una gran defensa, que era la única que él creía se debía invocar de una manera segura para no perderse en el laberinto de las disputas escolásticas ni en la gimnástica retórica. Esa defensa era la gran conciliación propuesta de las dos fracciones importantes del partido liberal.

A estas alturas de la discusión, es posible advertir que las ideas del liberalismo decimonónico predominaban en la argumentación de los diputados participantes en el debate. Comenzaba a ser perceptible en el discurso la tendencia a señalar que el objeto y la tendencia en los países democráticos era procurar el efectivo cumplimiento de las libertades, sin la persistencia de trabas ni “anormalidades históricas”. Los legisladores pedían un cambio de situación constitucional pero sin separarse del orden establecido, la cuestión era variar las leyes siempre que las necesidades así lo exigiesen. Para ellos, hombres del positivismo, para quienes el progreso y la civilización descubrían constantemente nuevos horizontes, era claro que una ley que en una época dada fue buena para un pueblo, podía dejar de serlo cuando el estado de esa sociedad había cambiado.

Enseguida hizo uso de la tribuna para hablar en contra del dictamen el diputado Manuel Flores²⁴. Comenzó su argumentación haciendo también mención al movimiento tuxtepecano, manifestando que se les acusaba a ellos, representantes del pueblo, de ser inconsecuentes con Tuxtepec, pero a manera de respuesta a esas personas, expresó en la tribuna, que la Cámara de representantes de la Nación entera no tenía la obligación de seguir la conducta fijada en un plan revolucionario.

Desde la óptica del diputado Manuel Flores, la nación estaba desligada de todo compromiso, no estaban en 1887 bajo un orden revolucionario, sino que se encontraban en pleno orden constitucional, y luego si estaban en pleno orden constitucional, y si no tenían tampoco compromiso alguno, entonces no eran inconsecuentes con nadie, al contrario, seguían moviéndose en la órbita, en la esfera de sus legítimos derechos.²⁵ Argumento este último coincidente con el de Emilio Rabasa de que “una vez incrustado en la constitución, la promesa revolucionaria quedaba cumplida y la revolución muerta”.²⁶

Concluyó su alocución haciendo una invitación a los dos tipos de demócratas existentes en la Cámara; los que de una manera ciega amaban tan solo los principios democráticos, pero tenían miedo de aplicarlos, debían votar con las

²⁴ Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, después se dedicó a la medicina, y posteriormente realizó estudios filosóficos y pedagógicos. en *Documentos Parlamentarios*, op. cit, p. 209-267.

²⁵ *Diario de los debates de la XIII legislatura*. p.566-600.

²⁶ Emilio Rabasa. *La evolución histórica de México*. México, Porrúa, 1956, p.122.

Comisiones; y aquellos, los del grupo a los que él pertenecía, que no necesitaban tocar dos veces la roca como Moisés, para hacer brotar de ella el raudal de la prosperidad, estaban obligados por su conciencia, a apoyar con su voz y su voto esa oposición, que se manifestaba en contra de la mutilación de los principios constitucionales.²⁷

Al subir a la tribuna parlamentaria el diputado Joaquín Casasús²⁸ hizo gala de su filiación positivista, al igual que otros de sus antecesores, y exteriorizó que en filosofía, como en política, él no aceptaba los principios absolutos, y que creía en la relatividad de todo conocimiento humano, por lo tanto, forzosamente tenía que negar que hubiera dogmas en política aplicables a todos los tiempos y todas las edades.

Consideró que era preciso aceptar los principios relativos, y buscar para cada pueblo la forma de gobierno que estuviera más en armonía con sus intereses, con sus costumbres y hábitos, con el grado de civilización o de ignorancia en que se encontrase.

Haciendo demostración de praxis política, el diputado Casasús externó a sus compañeros legisladores que no tenía que estar a discusión si sería más

²⁷ *Diario de los debates de la XIII legislatura.* p.566-600.

²⁸ Estudió la carrera de leyes. Fue secretario general de gobierno de Tabasco, fue profesor de historia, de economía política, fue autor de varias obras sobre esta materia. Representaba al estado de Tabasco en el XIII Congreso. en *Documentos parlamentarios. op. cit.* p. 209-237.

consecuente con la teoría de una perfecta democracia que el pueblo no tuviera alguna restricción para elegir al primer Magistrado de la República, esto es, que pudiera reelegirlo constantemente, sino que, lo que debería estar en el centro del debate era que, si en el momento histórico por el que atravesaba la nación, convenía establecer esa restricción.²⁹

No era tarea de la legislatura, según Casasús, escribir libros sobre el ideal democrático, sino que su encomienda era discutir leyes adecuadas á las necesidades del país; no eran hombres de escuela que iban a discurrir lo que sería bueno que fuera el país, sino que tenían que analizar lo que en ese momento era la República y a legislar en consonancia con ese estado social.

El tribuno Casasús, de una manera perspicaz, deslizó el atinado argumento de que la democracia, como todas las formas de gobierno, exige de parte del pueblo la práctica de sus principios, y por ello esa democracia no puede aceptar las teorías, que aun inspiradas en su índole, no se avengan con el carácter del pueblo que las ha de cumplir. Para el positivista diputado en cuestión, la democracia era comprensible tomando en cuenta los tiempos y las razas, es decir, la barbarie y la civilización.³⁰

²⁹ *Diario de los debates de la XIII legislatura.* p.566-600.

³⁰ *Idem.*

De manera que Casasús afirmó que no se trataba de consignar en la Constitución las utopías de los filósofos, ni las conquistas de los revolucionarios, propinándole así otro golpe al ya para entonces maltrecho movimiento tuxtepecano. Lo que se requería era patriotismo y sabiduría para presentarle al pueblo, no el ideal que habría de perseguir, sino el canon que tenía que practicar.

El legislador Casasús en su perorata sentenció que nuestro país no debía ser gobernado con principios absolutos, ni con teorías más o menos difíciles de alcanzar, sino con prescripciones que tuvieran la ventaja de ser practicables, a fin de que se educara al pueblo en la práctica de las instituciones.

Sobre el argumento de que lo práctico era lo que debía reinar en la política nacional, el representante Casasús afirmó que el principio que proclamaban los defensores del dictamen, pertenecía a esa categoría; coincidiendo con una tesis que manejaba el diario *El siglo XIX*, y que también hablaba de que la política no era una ciencia abstracta, sino que tenía una forzosa aplicación a la práctica y que podría no ser el ideal democrático, pero estaba en armonía con el estado social de ese momento³¹; Joaquín Casasús reconoció que no era sin duda alguna el planteado por los constituyentes de 1857; pero era el que reclamaba la conveniencia de la Patria, las necesidades de su época y las exigencias de la política. Concluyó afirmando de una manera enfática que el político no vacila, y

³¹ “La reelección en la Cámara”. *El siglo XIX*. 21 de abril de 1887.

que él daba su apoyo irrestricto a ese término medio, porque así lo exigían las circunstancias del país.

Le sucedió en la máxima tribuna de la nación el diputado Gilberto Crespo y Martínez³². Comenzó su peroración haciendo mención de su antecesor en el estrado, señalando que la base indestructible del progreso, es la libertad, porque la libertad es el tabernáculo del derecho, y enseguida le administró al diputado Casasús la acusación de haberle negado al pueblo su soberanía, basando su imputación en el hecho de que Casasús juzgaba conveniente que en nuestro país los atributos de esa soberanía fueran absorbidos por la autoridad.

El diputado Crespo suscribió la idea de que un partido liberal que trate de merecer realmente tan honroso nombre, no podía nunca, sino por un error, tratar de restringir los derechos políticos de un pueblo. La revolución había sido juzgada ya, y juzgada favorablemente, no por haber cometido ese error- es decir, el haber proclamado la no reelección -, sino porque éste había sido completamente borrado, por el hecho de que esa revolución había sabido llevar la locomotora de un extremo a otro del país, porque se multiplicaron los hilos telegráficos, se levantó a gran altura el crédito de la nación y había sabido conservar la paz, a cuya benéfica sombra había dado gran impulso a la instrucción pública, se

³² Estudió en la Escuela Nacional de Ingenieros. Fue profesor de geología y paleontología, oficial primero del Ministerio de Fomento, fue cónsul en La Habana, Cuba, en el XIII Congreso representaba al distrito de Cuautla, estado de Morelos. en *Documentos Parlamentarios*, op. cit, p. 209-237.

fomentó la agricultura, el comercio y la minería, se mantuvo la más perfecta seguridad en las ciudades y en los campos, y finalmente había encarrilado a la República en la senda de los pueblos trabajadores y civilizados.³³

Estas alusiones al avance material del país en medio de la discusión parlamentaria merecieron la desaprobación de la oposición en la prensa; ya que de acuerdo a su opinión, la reforma que se trataba de introducir en la Constitución, por más que se esforzaran en hacerla aparecer los oradores como una exigencia del progreso y como un paso a la perfección de las instituciones republicanas, en opinión de *El Monitor Republicano*, de lo que en realidad se trataba era de proveer al Jefe del Ejecutivo de las herramientas legales con vistas a la renovación de los poderes federales. Según *El Monitor*, era un negocio en donde los principios tenían muy poco que ver, y en donde lo que imperaban eran los intereses personales.³⁴

El legislador Crespo y Martínez, para debatir la iniciativa de reforma constitucional, esgrimió el arma de la defensa de los derechos del hombre, ya que en la parte resolutive se declaraba inhábil al gobernante para continuar en el poder después de ocho años. Dicho diputado sostuvo que si esa declaración perjudicaba al Presidente, atentaba todavía de un modo más directo a los derechos del hombre. ¿Por qué? Porque Crespo defendió la idea de que la función pública no

³³ *Diario de los debates de la XIII legislatura*. p. 566-600

³⁴ "Boletín del Monitor". en *El Monitor Republicano*. 23 de abril de 1887.

era más que una delegación. No había pues, derecho propio en el que la ejercía, el derecho residía en quien delegaba su ejercicio. De manera que para el diputado era claro y evidente que, con gran injusticia, era el derecho del individuo mexicano al que perjudicaba la iniciativa. Así pues, el representante popular estimó que el Congreso no estaba autorizado para coartar tales derechos, antes bien, tenían el deber sagrado de mantenerlos incólumes³⁵.

Las discusiones parlamentarias de finales del siglo XIX, como podemos apreciar, eran de una gran riqueza oratoria y argumentativa. Al estudiarlas es posible valorar como se traslucen los ideales de esa época en los argumentos de los destacados legisladores. En el discurso arriba mencionado, es interesante como el diputado Gilberto Crespo se hace eco de los valores de su tiempo y reivindica el individualismo liberal, que era entonces la ideología avanzada, abogando por la supremacía de los derechos del hombre.

Asimismo, el progreso, concepto paradigmático de la época porfiriana, se revela en estos discursos como el destino indefectible de los pueblos. Hemos podido percibir hasta ahora como los diputados participantes en este debate, siendo fieles a la ideología de su entorno, estaban ciertos que no existían los principios absolutos, que nada era estacionario, y que era por demás inútil legislar para las edades futuras.

³⁵ *Diario de los debates de la XIII legislatura*. p. 601-635

El día 21 de abril de 1887 continuó el debate en la Cámara. Tomó la palabra el legislador Trinidad García de la Cadena³⁶, quien comenzó su discurso reconociendo que por buenas que sean las leyes, no son, no pueden ser nunca invariables, porque han de estar siempre en armonía con los adelantos morales y materiales de los pueblos. Expresó que si esto no fuera así, serían completamente inútiles los cuerpos legislativos y ni él ni sus compañeros estarían reunidos en ese Augusto Santuario.

Hizo apología de la manera en que el país entero podía dar testimonio de cómo el “partido” porfirista había cumplido religiosamente todos sus compromisos. No había razón para acusársele de haber sido inconsecuente con el principio anti-reeleccionista, porque, justificó, no se proclamó la no-reelección de una manera absoluta, indefinida, y la mejor prueba que de esto podía darse es que se admitía la reelección del presidente después de un periodo de cuatro años.³⁷

Señaló que los adversarios del dictamen proponían al pueblo la reelección absoluta e indefinida, en tanto él, los signatarios de la iniciativa, así como los miembros de las Comisiones, admitían la reelección solamente por cuatro años; reconociendo que sus adversarios, al igual que él y los partidarios de la reelección limitada, habían confesado francamente que tenían miedo, mucho miedo a la

³⁶ Liberal, Fue secretario de Gobernación, de Hacienda, dirigió el Nacional Monte de Piedad y la Escuela Nacional de Ciegos. en *Documentos Parlamentarios*. op. cit, p. 209-237

³⁷ *Diario de los debates de la XIII legislatura*. p. 601-635.

dictadura, y que coincidían en la aseveración de que es muy fácil que un presidente se convierta en tirano.³⁸

Introdujo como argumento principal en la discusión la disyuntiva de que si un presidente llegara a convertirse en déspota, ¿Cuál de los dos proyectos traería mayores perjuicios para el pueblo? ¿Sería por ventura el proyecto que consultaba la Comisión, que sólo concede cuatro años de vida al despotismo, o el que proponían sus adversarios, que le concedían, según él, cuarenta? Finalizó su intervención lamentándose que los oradores que lo habían precedido habían hecho un pésimo uso de la lógica.³⁹

Le sucedió en el podio el diputado José María Romero⁴⁰, quien también comenzó su exposición haciendo mención a Tuxtepec, y dijo que los representantes de entonces, como consecuencia accidental de la idea que dominó en esa revolución, y para responder por el momento a la exigencia de las pasiones, establecieron la no-reelección inmediata del Presidente de la República, reformando los artículos 78 y 109 de la Constitución. Sin embargo consideró necesario hacer notar a los diputados, que al verificarse esa transacción con las exigencias de partido, se proclamó siempre, en todas las circunstancias, en todos los documentos públicos y en esa Asamblea, que la idea de no-reelección era

³⁸ *Ibídem.*

³⁹ *Ibídem.*

⁴⁰ Diputado a los VI, VII y VIII Congreso, decidido partidario de Benito Juárez, en la XIII legislatura representó al distrito de Huétamo, del estado de Michoacán de Ocampo. en *Documentos parlamentarios. op. cit*, p. 209-237.

antidemocrática porque coartaba la completa libertad de elección de que deben disfrutar los pueblos libres, y que era injusta, porque privaba a los buenos gobernantes de continuar en el poder el tiempo necesario para dar cima a sus proyectos de engrandecimiento y bienestar del pueblo, dejando así a sus sucesores una obra incompleta, un programa económico que tal vez no fructificara.⁴¹

Con perspicaz acierto recurrió al argumento de que las Comisiones que suscribían la iniciativa de reforma constitucional confesaban en su parte expositiva que la idea más democrática era el primitivo artículo 78 de la Constitución, el cual no ponía límite a la reelección del presidente, y dejaba la más amplia libertad al pueblo para decidir de sus destinos; e hizo hincapié en que la idea anti-reeleccionista fue sólo el principal accidente de las últimas contiendas, coincidiendo con la opinión que pronunciaría Justo Sierra de que “Tuxtepec representó la satisfacción de una pasión momentánea”⁴², pero reconoció el diputado Romero que, en efecto, fue un acto honroso para el gobierno de Tuxtepec no haber basado el triunfo de esa idea en el éxito de las batallas, sino sujetarla al orden constitucional.

Con gran aplomo hizo un llamado a la Cámara para entrar en pleno orden constitucional, para que abandonaran de una vez por todas el estado accidental y

⁴¹ *Diario de los debates de la XIII legislatura*. p. 601-635.

⁴² Justo Sierra. *Evolución Política del pueblo mexicano*. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, p. 288.

las ideas que brotaron de una cuestión política, y que se encaminaran en la recta vía que señalaban las doctrinas de la democracia representativa moderna, la cual confiaba al buen sentido del pueblo la completa libertad de elección para nombrar al jefe del Estado. El temor de la perpetuidad en el poder no debía dominar por más tiempo los ánimos de los representantes.⁴³

La prensa opositora, atenta a tan importante debate parlamentario, criticaba con mordacidad el que se ponderara como máximo logro de la democracia la reelección del ejecutivo, ya que señalaba que en el ayer inmediato “el ogro” de la reelección proyectaba sobre el horizonte de la nación las sombras más densas, y era para los tuxtepecanos el heraldo de la desdicha; en cambio, para ese momento era el númen del porvenir, representaba al sol a quien debían saludar.⁴⁴

El diputado Romero continuó su exposición arguyendo que México gozaba de bienhechora paz, que sólo quedaba el recuerdo de pasadas agitaciones, que el pueblo se acostumbraba ya a la práctica de las instituciones liberales, y que aspiraba a la más completa libertad de elección; que las mejoras materiales recibían impulso, que el capital extranjero comenzaba a fluir a los mercados nacionales, que la industria nacía bajo formas diversas, que el crédito público estaba restablecido y el comercio internacional adquiriría incremento con las vías férreas. Para el diputado todas estas circunstancias favorecían el imperio del

⁴³ *Diario de los debates de la XIII legislatura*. p. 601-635.

⁴⁴ “Boletín del Monitor”, en *El Monitor Republicano*, 20 de abril de 1887.

orden constitucional y la absoluta libertad para que el pueblo eligiera al jefe del Estado que realizara el programa económico que la nación mexicana demandaba⁴⁵.

Mientras en la Cámara legislativa se ponderaban los avances materiales y los logros en la pacificación del país, la prensa ponía a circular en las calles los argumentos de que lo que era visto como malo, detestable, imposible de tolerar y hasta traidor, lo que se había considerado como el mejor justificante para levantarse en armas y derrocar administraciones, - es decir la reelección presidencial - se había convertido en el mejor, más aceptable, conveniente, patriótico y en el único medio para preservar la paz pública, y hacer caminar a México por el sendero de la libertad y del progreso.⁴⁶

Después habló el diputado José María Gamboa⁴⁷, quien introdujo un elemento nuevo en la discusión parlamentaria, el cual era la personalización del tema en cuestión. Desde su perspectiva, no se trataba simplemente de una personalidad, lo cual haría que la repetida cuestión, aunque nunca mezquina ó baladí, se la encerrase en un círculo demasiado estrecho, porque tendría que limitársela a un tiempo corto y determinado. Por lo tanto, lanzó una crítica al orador que lo había precedido en la tribuna, ya que su peroración adolecía de

⁴⁵ *Diario de los debates de la XIII legislatura.*

⁴⁶ "Boletín del Monitor". *El Monitor Republicano*. 26 de abril 1887, p. 1.

⁴⁷ Discípulo de Gabino Barreda. Estudio leyes, fue oficial 2° de la Secretaría de Hacienda, juez cuarto correccional, catedrático de la Escuela Nacional Preparatoria, en 1887 representaba al distrito de Apam, Hidalgo. en *Documentos Parlamentarios. op. cit*, p. 209-237.

ese vicio capital: había personalizado la cuestión. Para el diputado Gamboa era importante no perder de vista que ellos no iban a legislar tan sólo para la próxima elección de presidente, pues lo que estaba en la mesa de la discusión era un principio, y no la valía de un solo hombre; que en la discusión de ese principio se decidía la suerte nada menos que de la libertad del sufragio, y que por lo mismo tenía que preocupar honda y profundamente a todos los que comulgaban con el credo democrático.

No solo el diputado Gamboa hacía hincapié en el hecho de no poner dedicatorias al proyecto reformista, sino que también la prensa opositora alzó la voz contra el hecho de que algunos legisladores comenzaran a ponerle rostro y apellido a la iniciativa de reforma de los artículos 78 y 109 constitucionales.

En la prensa se comentaba que la mira personal de la reelección era evidente. Al respecto aseveraba *El Monitor Republicano* que no era posible negar que el pueblo mexicano tenía en todo tiempo el inalienable derecho de modificar su Constitución, pero dichos cambios debían ser en todo momento la expresión de la libre voluntad de ese pueblo y no el resultado de bastardas ambiciones y de intereses personales, como era el caso, según dicho diario capitalino.⁴⁸

El siglo XIX, periódico favorable a la reforma que abría la puerta a la permanencia del general Díaz en la silla presidencial, igual externó su opinión en

⁴⁸ “Boletín del Monitor”. en *El Monitor Republicano*, 19 de abril de 1887.

referencia de si tal iniciativa llevaba o no dedicatoria personal. Dicha publicación expresaba que a pesar de que el presidente Díaz había protestado en 1879 que jamás admitiría una candidatura de reelección, el Congreso estaba en su derecho de permitirla de nuevo, ya que si el general Díaz no la admitía, tal vez el presidente que le sucediera si lo haría. El argumento de este medio periodístico concluía diciendo que los legisladores no hacían las leyes para un hombre, sino para un pueblo, y que no estaban preparando una ley para un solo caso.⁴⁹

Para el legislador José María Gamboa la democracia estaba basada en tres principios enteramente fijos: el primero de estos era la mutabilidad del Jefe del Estado, que en otros términos, es la facultad de los electores para remover al presidente; el segundo se refiere a la no perpetuidad en el poder del Supremo Jefe de la Nación, pues desde el momento en este se perpetúa en el poder, la democracia deja de ser democracia y se convierte en tiranía; y el tercer principio, que en cierta manera es la consecuencia de la no perpetuidad en el poder, consistía en la mutación real y efectiva, pero frecuente ni injustificada, del presidente de la República⁵⁰.

Dicho legislador sentenció que mientras no concurrieran estos tres principios que para él eran científicos, y que correspondían a un estudio profundo de la democracia verdadera, la verdad era que la ley o la Constitución que no los hubiera tenido presentes, era una ley antidemocrática.

⁴⁹ “El presidente de la República y la reelección”. en *El siglo XIX*. 12 de abril 1887.

Ya bien encauzados como estaban a esas alturas los legisladores en la dinámica de denostar la revolución tuxtepecana, Gamboa también hizo su aportación al respecto, profiriendo que con esa facultad abstracta, con ese derecho enteramente ideal que tenía el pueblo, según el precepto del artículo 78 constitucional, tal como salió del Congreso Constituyente, lo que se había cosechado eran los horrores de las revoluciones de la Noria y de Tuxtepec; mientras que con el principio de no-reelección, lo que se había recogido eran las transmisiones legítimas del presidente Díaz al presidente González y viceversa.⁵¹

En la visión del tribuno Gamboa el pueblo era enteramente práctico, quería derechos eficaces, deseaba, y con mucha justicia, evitarse todos los horrores de la revolución, lo cual no era posible alcanzar de una manera práctica y eficaz con el artículo tal como lo concibieron los diputados constituyentes. La historia fue expuesta como razón y como maestra de la conveniencia de la reforma, y sobre todo la historia reciente; historia en la que los que menos, habían sido testigos presenciales.

Sobre esos argumentos el representante popular razonó que con la facultad libre y absoluta de reelegir al presidente tantas veces cuantas ocasiones el pueblo lo determinara, se corría el peligro grave de la perpetuidad del poder, y por lo tanto, la democracia tendría que resentir los golpes tremendos de desprestigio, de

⁵⁰ *Diario de los debates de la XIII legislatura.* p.601-635.

⁵¹ *Ibídem.*

debilidad y hasta de muerte, que vienen cuando no se observan la ley de las modificaciones, ley tan necesaria en la vida física como en la social.⁵²

El diputado Gamboa afirmó que con la reforma propuesta por las Comisiones 1° de Puntos Constitucionales y 1° de Gobernación, se llenaban y alcanzaban los tres requisitos que esencialmente exigía la democracia. Se alcanzaba la mutabilidad, se conseguía la mutación real y efectiva sin ser frecuente ni inmotivada, al tiempo que se obtenía la no perpetuidad en el poder.

Como hemos podido percibir, la paz fue otro de los temas que salieron a relucir en los argumentos de los legisladores. Ante la coyuntura político-electoral que se avecinaba, los bienes adquiridos en el periodo casi ininterrumpido de paz adquirieron relevancia en el debate legislativo. Aunque hubo diputados que en su discurso pedían no ponerle nombre y apellido a la reforma constitucional, la tendencia general fue asociar el bienestar y el progreso material con la personalidad del general Díaz.

Para muchos diputados el presidente Díaz era el factor principal para que se mantuviera la paz, gracias a su benéfica influencia, a su patriotismo y a sus dotes administrativas. También hacían referencia a que el Primer Magistrado era el constructor de la prosperidad nacional, del prestigio y del crédito en el extranjero.

⁵² *Ibídem.*

Con semejantes argumentos ya nos podemos imaginar que la reforma se antojaba inaplazable e irrechazable.

El polemista Francisco Bulnes⁵³, miembro de la legislatura en cuestión, inició sus reflexiones con la afirmación de que a Bossuet se le había reprochado siempre que olvidó el universo al escribir su historia universal; que a las Comisiones podía reprochárseles que habían olvidado la libertad en una reforma que pretendía ser liberal.

Fue enfático al afirmar que en nada podía perjudicar a otro el voto de un ciudadano, ya que este, ni niega, ni decide; lo hace la mayoría, pues es quien puede escoger a un buen ó mal gobernante. Y prorrumpió al pleno con la pregunta de ¿cuál era el único modo de destruir la probabilidad de que una mayoría eligiera un mal gobernante? A lo que contestó enseguida agudamente y arrancando las risas a los diputados, de que él no conocía más que una, y era no dejarla elegir.⁵⁴

Para el tribuno Francisco Bulnes las restricciones acababan con el derecho, lo que planteaba la disyuntiva de que o no debía haber restricciones, o no existía tal derecho. Para Bulnes, cuando se restringía una libertad, se suprimían aquellos actos que eran precisamente nocivos, no por simple probabilidad, porque

⁵³ Hizo sus estudios en la Escuela Nacional de Agricultura e Ingenieros, desde muy joven comenzó a figurar en la prensa periódica. Fue un gran polemista, y formó parte en distintas ocasiones de la Representación Nacional con carácter de diputado. en *Documentos Parlamentarios. op. cit.*, p. 209-237.

⁵⁴ *Ibídem.*

entonces no habría libertad posible; no habría libertad de prensa, porque un individuo tiene la probabilidad de atacar la vida privada de alguien; no habría libertad de cultos, porque un cura puede sacar procesiones, no habría libertad de trabajo, porque alguno podría hacer dinamita, y no habría libertad de asociación, porque pudieran formarse gavillas para robar en los caminos. Estas reflexiones arrancaron una gran ovación en la tribuna y en las galerías.⁵⁵

Entre risas y aplausos remató diciendo que para las Comisiones, la libertad individual no debía ser todo aquello que no dañe a otro, sino que: “la libertad individual debía restringirse siempre que otro la perjudique”.

Con su gran habilidad de orador remarcó que el crimen, el delito y la tiranía habían encontrado su principio legal, ya que para reprimir el robo había que restringir el derecho de poseer; para reprimir el homicidio y el asalto se tendría que restringir la vida humana y encarcelar a los hombres; y para reprimir la violación y el estupro había que restringir la reproducción de los seres, y para restringir los abusos del poder era menester mutilar la voluntad nacional⁵⁶.

Posteriormente enfiló sus baterías en contra del principal argumento de la iniciativa de reforma constitucional, que a saber, era la posible perpetuidad en el cargo presidencial. Bulnes expuso que si esa perpetuidad era obtenida porque el

⁵⁵ *Ibídem.*

⁵⁶ *Ibídem.*

pueblo elegía de una manera libre y constante al mismo gobernante, si era elegido por la voluntad libre y soberana del pueblo, entonces, ellos como representantes del pueblo, no tenía que importarles lo que durase el gobernante, ni preocuparse porque el pueblo se tiranizara a sí mismo.⁵⁷

Haciendo uso “de su fácil palabra y gran erudición”⁵⁸, realizó un llamado a sus compañeros de sesión a ser consecuentes, a no preocuparse de que hubiese perpetuidad, ya que esta vendría del pueblo, y ni aun así podría existir. Ya que si las Comisiones entendían por perpetuidad la duración probable de las monarquías hereditarias, no tenían razón, ya que el rey desde niño comienza a ser rey, y en las Repúblicas se comienza a ser presidente a los 40 o 55 años de edad, y tratándose en este caso de un país donde desgraciadamente la vida media era de 25 años, el peligro de la perpetuidad del gobernante quedaba conjurado, ya que la reforma le concedía solo ocho años.⁵⁹

Les recordó a sus compañeros diputados que existían preceptos en la misma Constitución contra aquél que atacara la libertad del sufragio; manifestó que habían olvidado también a la sociedad y al pueblo, y que no entendía cómo podían concebir una democracia sin un pueblo viril, por lo que les espetó que su restricción era una ofensa a la nación, y que en la práctica resultaría ser una nimiedad.

⁵⁷ *Ibídem.*

⁵⁸ Rogelio Jiménez Marce. *La pasión por la polémica*. México, Instituto Mora, 2003, p.27.

⁵⁹ *Diario de los debates de la XIII legislatura*. p. 601-635.

Con su estilo muy característico, y que también provocó la hilaridad de sus compañeros, calificó de ingenuos a los miembros de las Comisiones que presentaron el dictamen por creer que el voto público se podría falsificar solo en el momento de la segunda elección, ya que si se lo propusieran, podría ocurrir desde la primera elección. Con ese modo de razonar, tal parecía que los defensores del dictamen creían que el sufragio electoral era una planta que solo daba frutos cada ocho años.⁶⁰

Posteriormente se sumó también a las críticas al principio de Tuxtepec, que para entonces ya tomaba ribetes de linchamiento, y lo calificó de ser un error completo. La bandera de Tuxtepec, dijo Bulnes, la que proclamaba el sufragio libre, proclamó la no reelección como garantía de ese sufragio libre, pero remarcó que, los hechos, esos maestros clásicos del entendimiento humano, habían demostrado sobradamente que el principio de no reelección no era la garantía del sufragio. Como podemos apreciar, ya para estas alturas “ni quien se preocupase por el cumplimiento de los planes revolucionarios, sino era para desgarrarlos”.⁶¹

Desde otra tribuna, la de la prensa, hubo respuesta para Bulnes y todos los detractores del principio de Tuxtepec, *El Monitor Republicano*, por ejemplo, recordaba que el 5 de mayo de 1878 fue promulgado de la manera más solemne el principio antireeleccionista, y lo que entonces fue aplaudido como la mayor

⁶⁰ *Ibídem.*

⁶¹ José López Portillo. *Elevación y caída de Porfirio Díaz*. México, Librería Española, 1952, p. 202.

conquista alcanzada y que ponía a salvo a la democracia de las asechanzas de sus enemigos, en ese momento era condenado y visto como un contrasentido, como un absurdo que solo pudieron hacer aceptables las necesidades de la época.⁶²

Desde esa tribuna de la opinión pública, *El siglo XIX*, en respuesta a su colega *El Monitor Republicano*, opinaba que el plan de Tuxtepec y la evolución política que había llegado con él, no tenían que ser dogmas inmutables, intangibles, y sin que nadie pudiera tocarlos en su inviolabilidad. Con gran acierto proclamaba que si el pueblo creyó en 1876 que la garantía de la libertad del sufragio estaba en la no reelección, el pueblo podía creer en 1887 que el voto libre estaba en sí mismo, y no en restricciones efímeras.⁶³

Ante un proyecto que dictaba recetas acerca de lo que era necesario precaver, el diputado Bulnes tomó la posición de que la suerte de la democracia dependía del trabajo, de la instrucción pública, de la defensa de las instituciones, de las leyes de responsabilidad que la Constitución exigía a los funcionarios públicos. El pueblo mismo era el responsable del devenir democrático del país, por encima de todos los proyectos de ley que quisieran acotar su libertad, ya que un pueblo que no sabe hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios públicos, no está llamado a la libertad. La conclusión de Bulnes era que un pueblo así, sirve

⁶² “Boletín del Monitor”. *El Monitor Republicano*. 26 de abril 1887.

⁶³ “La reelección y la oposición”. *El siglo XIX*. 20 de abril de 1887.

tanto para la democracia como los cuerpos de caballería para los combates navales.⁶⁴

Con gran elocuencia pidió que se le devolviera a la nación el gran principio de la libertad individual, ya que los grandes héroes de las batallas recientes se lo habían arrebatado con su valor en un campo de batalla. Finalmente, concluyó con la sentencia de que la Constitución no podía quedar imperfecta por la cólera de una mano revolucionaria. Cobijado por atronadores aplausos, sentenció que la paz estaba hecha, por consiguiente, la labor de los representantes de la nación era hacer con su voto la regeneración de los principios políticos⁶⁵.

El último orador fue el diputado Alfonso Lancaster Jones⁶⁶, quien enseguida cuestionó la intención de querer reivindicar el derecho de reelegir por indefinido número de veces o periodos al presidente de la República, ya que según él, lo que podría ocurrir es que se materializara el peligro de que dicha reelección se realizara hasta tal punto, que el depositario del poder Ejecutivo no lo depusiera sino en el seno de la misma tumba.

Eso era precisamente lo que las Comisiones intentaban exorcizar, ya que desde su óptica, era algo que no convenía que se verificase bajo ninguna forma,

⁶⁴ *Diario de los debates de la XIII legislatura.* p. 601-635.

⁶⁵ *Diario de los debates de la XIII legislatura.* p.601-635.

⁶⁶ Abogado, fue Srio. de Gobierno del estado de Jalisco, abogado de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y del Banco de Londres, México y Sudamérica, presidía el Congreso cuando se elevaron a rango constitucional las leyes de Reforma, en la XIII legislatura representaba a un distrito de Jalisco. en *Documentos Parlamentarios.* op. cit, p. 209-237.

ya fuera de una manera legítima o ilegítima, porque resultaba dañino al prestigio constitucional de la democracia y al interés político de la República⁶⁷.

Para el diputado Lancaster Jones, lo correcto era adoptar la reforma en cuestión, aún cuando se restringiera de ese modo la libertad electoral del pueblo, ya que uno de sus deberes como diputados era proteger a sus representados del peligro de sus propios extravíos y entusiasmos, evitando que brotaran de esa misma libertad, como de una crisálida, la autocracia y la dictadura, revestidos con las deslumbrantes galas del genio militar o político; porque en este punto - remarcó el diputado Lancaster - en la producción de ese fenómeno la naturaleza humana no cambia, y la historia con frecuencia se repite.⁶⁸

Refirió que la reelegibilidad indefinida orillaba al peligro de la perpetuidad de un hombre en el poder, la cual, como quiera que se verificara, y siendo un hecho posible y ya consumado en el país, desvirtuaba, desnaturalizaba, y hacía ilusorio el procedimiento de la renovación periódica de los poderes en que se basa y se funda la democracia, al igual que la libertad electoral⁶⁹.

La solución para evitar que los titanes de la tiranía rompieran sus cadenas y escaparan de la oscuridad de las edades donde los había arrojado la revolución de Tuxtepec, era aprobar la reelección limitada. Y al adoptarla, de ninguna manera

⁶⁷ *Diario de los debates de la XIII legislatura*. p. 601-635.

⁶⁸ *Ibíd.*

⁶⁹ *Ibíd.*

se cedía al influjo de un espíritu débil, contemplativo, vacilante, de moderantismo y términos medios; al contrario, se obedecía al impulso de la verdad, la lógica, y el sentimiento público dominante⁷⁰.

Así pues, los defensores del proyecto de reforma de los artículos 78 y 109 se vanagloriaban de haber encontrado el famoso y justo término medio en política. Sin embargo, para los periódicos opositores, era una postura totalmente censurable, ya que después de haber reducido a jirones la bandera de Tuxtepec, los que se presentaban como los grandes conciliadores, no eran más que desertores del estandarte revolucionario que les había abierto las puertas del poder.⁷¹

Pero para el legislador Lancaster Jones, no había inconsecuencia alguna ni por los antiguos sostenedores de un extremo, ni por los añejos partidarios del opuesto; lo que se realizaba, lo que se verificaba, era el abrazo patriótico de dos partidos, la unión perfecta de dos ideas antagónicas que tendían a armonizarse y confundirse en el mismo principio.⁷²

De esta manera, después de haber desfilado en la máxima tribuna de la nación los diferentes oradores, defendiendo sus posiciones ya fuera a favor o en contra del proyecto de reforma constitucional de los artículos 78 y 109

⁷⁰ *Ibídem*.

⁷¹ "Boletín del Monitor", en *El Monitor Republicano*. 23 de abril de 1887.

⁷² *Diario de los debates de la XIII legislatura* p. 601-635.

constitucionales, al acordar que estaba lo suficientemente discutido en lo general dicha iniciativa, se procedió a la votación, y el resultado fue de 168 votos a favor del proyecto y 12 votos en contra del mismo. Y así, “después de la sangre vertida en la Noria y Tuxtepec, el principio de la reelección cambió de naturaleza, dejó de ser malo y se convirtió en bueno”.⁷³

Los artículos 78 y 109 constitucionales quedaron de la siguiente manera:

Artículo 78. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre, y durará en él cuatro años, pudiendo ser reelecto para el periodo constitucional inmediato; pero quedará inhábil enseguida para ocupar la presidencia por nueva elección, a no ser que hubiesen transcurrido cuatro años contados desde el día en que cesó en el ejercicio de sus funciones.⁷⁴

Artículo 109. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, y podrán establecer en sus respectivas constituciones la reelección de sus gobernadores, conforme a lo que prescribe el artículo 78 para la del presidente de la República.⁷⁵

Así terminaba el debate parlamentario que la prensa hostil a los poderes de la Unión llegó a suponer fingido, y lo calificó de ser una farsa cómica, en donde el pro y el contra se habían arreglado, distribuyéndose sus respectivos papeles, presentándole al pueblo una discusión falsa y convenida entre los amigos del

⁷³ José López Portillo. *Elevación y caída de Porfirio Díaz. op. cit.* p.203.

⁷⁴ *Diario de los debates de la XIII legislatura* p. 601-635.

⁷⁵ *Ibíd.*

poder.⁷⁶ Consideramos que por tratarse de un asunto de tanta trascendencia para ese momento, las apreciaciones debían ser más elevadas y no descender a un campo tan mezquino.

El país permaneció tranquilo, “demostrando una completa aquiescencia con las decisiones de sus representantes”⁷⁷. En las galerías de la Cámara no se notó hostilidad pronunciada contra los oradores, sea cual haya sido su posición, por lo que durante el transcurso de la discusión nunca fue necesaria en el recinto la presencia de las fuerzas armadas. Así quedó preparada una nueva evolución política, sin que hubiera costado una gota de sangre al pueblo, porque se consumó dentro de las instituciones, y en la forma prescrita por estas.

La discusión en la Cámara en efecto dividió a los diputados, porque mientras unos aceptaban el proyecto tal como se presentaba, otros querían que no se limitara a dos períodos la libertad de elección, sino que se dejara indefinida. Asombrosamente la clase política presente en la Cámara, la cual accedió al poder gracias al triunfo de Tuxtepec, no tuvo entre sus filas defensores para el precepto tuxtepecano, quedando este abrogado.⁷⁸ De modo que sin violar una sola fórmula legal, el presidente Díaz fue facultado por la decisión de sus conciudadanos, para

⁷⁶ “La reelección restringida”. en *El siglo XIX*. 25 de abril de 1887.

⁷⁷ “La situación”. en *El siglo XIX*. 29 de abril de 1887.

⁷⁸ Emilio Rabasa. *La evolución histórica de México. op. cit*, p.132.

postularse de nuevo a la presidencia de la República, si así lo decidía, cuando llegara el momento oportuno⁷⁹.

⁷⁹ Justo Sierra. *Evolución política del pueblo mexicano. op. cit*, p. 288

Consideraciones finales.

En la teoría, la práctica de la democracia exige la absoluta libertad de los pueblos cuando estos se aprestan a hacer públicas sus opiniones en la lucha electoral. En el año de 1887 se gozaba de una relativa tranquilidad pública, por lo que los diputados al XIII Congreso de la Unión pedían que se dejara obrar al pueblo conforme a sus tendencias políticas.

Los diputados de la XIII legislatura, a pesar de tener visiones encontradas del tema que se discutía en la máxima tribuna de la Nación, estaban muy conscientes de una cosa: su tarea como uno de los poderes de la República era legislar, y legislar es concertar. Entre ellos había el consenso de que era necesario reformar la Carta Magna, ya que ninguno de los diputados participantes en el debate quería que el país se quedara “fossilizado” en usos, que según su particular visión, resultaban ya superados. Había un consenso en el sentido de que se requería un cambio en las formas legales para mantener la paz social, por lo que resultaba necesario lograr una reforma constitucional para lograr la permanencia del Ejecutivo, sin generar conflictos de ingobernabilidad. Desde esta perspectiva solo así la nación podía aspirar a nuevos estadios de desarrollo y mantener la unidad dentro de la diversidad.

El “partido” tuxtepecano cumplió su programa revolucionario: hizo estampar en la Constitución el principio de no reelección. Su principal caudillo, convertido por el voto popular en presidente constitucional de la República, fue el primero en acatarlo, abandonando la presidencia al cumplirse el período para el cual fue electo. Al término del cuatrienio del general Manuel González el general Porfirio Díaz volvió a ocupar ese alto puesto; para entonces, la élite política comenzó a considerar que su permanencia en la presidencia era garantía de paz y progreso para la nación.

En un principio tal propósito tomó la forma de la prórroga por dos años del período presidencial, para terminar adoptando finalmente la opción de la reelección limitada del mandatario y de los gobernadores de los estados, conciliando así las doctrinas democráticas con las realidades prácticas. Después de todo, los fines de prorroguistas y de reeleccionistas eran idénticos, pues ambos eran porfiristas y aceptaban a la misma personalidad, pero diferían en las formas legales y en los medios, circunstancia que en un régimen respetuoso de la legalidad no era poca cosa.

El supuesto fundamental de toda crítica política, es en principio, claro y evidente: la realidad, siempre y en todo caso es perfectible, por lo tanto los diputados al XIII Congreso de la Unión decidieron enmendar la plana a Tuxtepec y abrieron el debate para decidir si se aprobaba o no la reelección presidencial por una sola ocasión. En este apasionado debate, el principio regenerador de Tuxtepec se quedó sin defensores, ya que las opiniones de los diputados

divergían, pero en el sentido de que si la reelección presidencial tenía que ser intermitente o indefinida. “Nada en la vida es inmutable y eterno” decían los diputados a favor de la reelección, y menos en la política, donde la perfección es más difícil de alcanzar.

Los legisladores representantes de la nación, decidieron que las circunstancias del país y el estudio concienzudo de la cuestión habían demostrado que el principio tuxtepecano fue necesario en un determinado momento, pero que ya los tiempos habían cambiado y era necesario corregirlo. Para 1887, al amparo de una, si no total, pero si perceptible paz, y descansando de las fatigas de pasadas luchas civiles, la Cámara de diputados declaró abrogado el principio de Tuxtepec, abriendo la puerta a la permanencia del general Díaz al frente de la primera magistratura.

La reelección del presidente Porfirio Díaz en 1888 no fue de ningún modo ilegal ni arbitraria, las formas legales siempre se respetaron, y los diputados, representantes del pueblo, según la teoría democrática, estaban en su perfecto derecho para permitirla. Tengamos siempre presente que uno de los rasgos más sobresalientes de las naciones regidas por principios democráticos es precisamente esa flexibilidad liberal en su sistema legislativo.

Anexos.

Plan de la Noria

Al Pueblo Mexicano:

La reelección indefinida, forzosa y violenta, del Ejecutivo Federal, ha puesto en peligro las instituciones nacionales.

En el Congreso una mayoría regimentada por medios reprobados y vergonzosos, ha hecho ineficaces los nobles esfuerzos de los diputados independientes y convertido á la Representación Nacional en una cámara cortesana, obsequiosa y resuelta á seguir siempre los impulsos del Ejecutivo.

En la Suprema Corte de Justicia, la minoría independiente que había salvado algunas veces los principios constitucionales de este cataclismo de perversión é inmoralidad, es hoy impotente por falta de dos de sus más dignos representantes, el ingreso de otro llevado allí por la protección del Ejecutivo. Ninguna garantía ha tenido desde entonces el amparo; los Jueces y Magistrados pundonorosos de los Tribunales Electorales son sustituidos por agentes sumisos del Gobierno, los intereses más caros del pueblo y los principios de mayor trascendencia quedan á la merced de los perros guardianes.

Varios Estados se hallan privados de sus autoridades legítimas y sometidos á gobiernos impopulares y tiránicos, impuestos por la acción directa del Ejecutivo y sostenidos por las fuerzas federales. Su soberanía, sus leyes y la voluntad de los pueblos han sido sacrificadas al ciego encaprichamiento del poder personal.

El Ejecutivo, gloriosa personificación de los principios conquistados desde la revolución de Ayutla hasta la rendición de México en 1867, que debiera ser atendido y respetado por el gobierno para conservarle la gratitud de los pueblos, ha sido abajado y envilecido, obligándolo á servir de instrumento de odiosas violencias contra la libertad del sufragio popular, y haciéndole olvidar las leyes y los usos de la civilización cristiana en México, Atexcatl, Tampico, Barranca del Diablo, la Ciudadela y tantas otras matanzas que nos hacen retroceder á la barbarie.

Las rentas federales, pingües, saneadas como no lo habían sido en ninguna otra época, toda vez que el pueblo sufre los gravámenes decretados durante la guerra, y que no se pagan la deuda nacional ni la extranjera, son más que suficientes para todos los servicios públicos, y deberían haber bastado para el pago de las obligaciones contraídas en la última guerra, así como para fundar el crédito de la Nación, cubriendo el rédito de la deuda interior y exterior legítimamente reconocida. A esta hora, reducidas las erogaciones y sistemada la administración rentística, fácil sería dar cumplimiento al precepto constitucional, librando al comercio de las trabas y dificultades que sufre con los vejatorios impuestos de alcabalas, y al erario de un personal oneroso.

Pero lejos de esto, la ineptitud de unos, el favoritismo de otros y la corrupción de todos, ha cegado esas ricas fuentes de la pública prosperidad: los impuestos se reagran, las rentas se dispendian, la Nación pierde todo crédito y los favoritos del poder monopolizan sus espléndidos gajes. Hace cuatro años que su procacidad pone á prueba nuestro amor á la paz, nuestra sincera adhesión á las instituciones. Los males públicos exacerbados produjeron los movimientos revolucionarios de Tamaulipas, San Luis, Zacatecas y otros Estados; pero la mayoría del gran partido liberal no concedió sus simpatías á los impacientes, y sin tenerla por la política de presión y arbitrariedad del gobierno, quiso esperar con el término del periodo legal democrática de los poderes que se prometía obtener en las pasadas elecciones.

Ante esta fundada esperanza que, por desgracia, ha sido ilusoria, todas las impacencias se moderaron, todas las aspiraciones fueron aplazadas y nadie pensó más que en olvidar agravios y resentimientos, en estañar las heridas de las anteriores disidencias y en reanudar los lazos de unión entre todos los mexicanos. Sólo el gobierno y sus agentes, desde las regiones del Ejecutivo, en el recinto del Congreso, en la prensa mercenaria, y todos los medios, se opusieron tenaz y caprichosamente á la amnistía que, á su pesar, llegó á decretarse por el concurso que supo aprovechar la inteligencia y patriótica oposición parlamentaria del 5º Congreso Constitucional. Esa ley que convocaba á todos los mexicanos á tomar parte en la lucha electoral bajo el amparo de la Constitución, debió ser el principio de una época de positiva fraternidad, y cualquiera situación creada realmente en el terreno del sufragio libre de los pueblos, contaría hoy con el apoyo de vencedores y vencidos.

Los partidos, que nunca entienden las cosas en el mismo sentido, entran en la liza electoral llenos de fe en el triunfo de sus ideas é intereses, y vencidos en buena lid, conservan la legítima esperanza de contrastar más tarde la obra de su derrota, reclamando las mismas garantías de que gozaban sus adversarios; pero cuando la violencia se arroga los fueros de la libertad, cuando el soborno sustituye á la honradez republicana, y cuando la falsificación usurpa el lugar que corresponde á la verdad, la desigualdad de la lucha, lejos de crear ningún derecho, encona los ánimos y obliga á los vencidos por tan malas arterías, á rechazar el resultado como ilegal y tentatorio.

La revolución de Ayutla, los principios de la Reforma y la conquista de la independencia y de las instituciones nacionales, se perderían para siempre si los destinos de la República hubieran de quedar á merced de una oligarquía tan inhábil como absorbente y antipatriótica; la reelección indefinida es un mal de menos trascendencia por perpetuidad de un ciudadano en el ejercicio del poder, que por la conservación de las prácticas abusivas, de las confabulaciones ruinosas y por la exclusión de otras inteligencias é intereses, que son las consecuencias necesarias de la inmutabilidad de los empleados de la administración pública.

Pero los secretarios de la reelección indefinida prefieren sus aprovechamientos personales á la Constitución, á los principios y á la República misma. Ellos convirtieron esa suprema apelación al pueblo en una farsa inmoral, corruptora, conmengua de la majestad nacional que se atreven á invocar.

Han relajado todos los resortes de la administración, buscando cómplices en lugar de funcionarios pundonorosos.

Han derrochado los caudales del pueblo para pagar á los falsificadores del sufragio.

Han calculado la inviolabilidad de la vida humana, convirtiendo en práctica cotidiana asesinatos horrorosos, hasta el grado de ser proverbial la funesta frase de "Ley fuga".

Han empleado las manos de sus valientes defensores en la sangre de los vencidos, obligándolos á cambiar las armas del soldado por el hacha del verdugo.

Han escarnecido los más altos principios de la democracia; han lastimado los más íntimos sentimientos de la humanidad, y se han beñado de los más caros y trascendentales preceptos de la moral.

Reducido el número de diputados independientes por haberse negado ilegalmente toda representación á muchos distritos, y aumentando arbitrariamente el de los reeleccionistas, con ciudadanos sin misión legal, todavía se abstuvieron de votar cincuenta y siete representantes en la elección de Presidente, y los pueblos la rechazan como ilegal y antidemocrática.

Requerido en estas circunstancias, instado y exigido por numerosos y acreditados patriotas de todos los Estados, lo mismo de ambas fronteras que del interior y de ámbitos litorales, ¿qué debo hacer?

Durante la revolución de Ayutla salí del colegio á tomar las armas por odio al despotismo: en la guerra de Reforma combatí por los principios, y en la lucha contra la invasión extranjera, sostuve la independencia nacional hasta restablecer al gobierno en la capital de la República.

En el curso de mi vida política he dado suficientes pruebas de que no aspiro al poder, á cargo, ni empleo de ninguna causa; pero he contraído también graves compromisos para con el país por su libertad é independencia, para con mis compañeros de armas, con cuya cooperación he dado cima á difíciles empresas, y para conmigo mismo, de no ser indiferente á los males públicos.

Al llamado del deber, mi vida es un tributo que jamás he negado á la patria en peligro; mi pobre patrimonio, debido á la gratitud de mis conciudadanos, medianamente mejorado con mi trabajo personal, cuanto valgo por mis escasas dotes, todo lo consagro desde este momento á la causa del pueblo. Si el triunfo corona nuestros esfuerzos, volveré á la quietud del hogar doméstico, prefiriendo en todo caso la vida frugal y pacífica del oscuro labrador á las ostentaciones del poder. Si por el contrario nuestros adversarios son más felices, habré cumplido mi último deber con la República.

Combatiremos, pues, por la causa del pueblo, y el pueblo será el único dueño de su victoria. "Constitución de 57 y libertad electoral" será nuestra bandera; "menos gobierno y mas libertades", nuestro programa.

Una convención de tres representantes por cada Estado, elegidos popularmente, dará el programa de a reconstrucción constitucional y nombrará un Presidente Constitucional de la República, que por ningún motivo podrá ser el actual depositario de la guerra. Los delegados, que serán patriotas de acrisolada honradez, llevarán al seno de la convención, las ideas y aspiraciones de sus respectivos Estados, y sabrán formular con libertad y sostener con entereza las exigencias verdaderamente nacionales. Solo permitiré hacer eco á las que se me han señalado como más ingentes; pero sin pretensión de acierto ni ánimo de imponerlas como una resolución preconcebida, y protestando desde ahora que aceptaré sin resistencia ni reserva alguna, los acuerdos de la convención.

Que la elección de Presidente sea directa, personal, y que no pueda ser elegido ningún ciudadano que en el año anterior haya ejercido por un solo día autoridad ó encargo cuyas funciones se extiendan á todo el territorio nacional.

Que el Congreso de la Unión sólo pueda ejercer funciones electorales en los asuntos puramente económicos, y en ningún caso para la designación de altos funcionarios públicos.

Que el nombramiento de los Secretarios del despacho y de cualquier empleado ó funcionario que disfrute por sueldos ó emolumentos más de tres mil pesos anuales, se someta á la aprobación de la Cámara.

Que la Unión garantice á los Ayuntamientos derechos y recursos propios, como elementos indispensables para su libertad é independencia.

Que se garantice á todos los habitantes de la República el juicio por jurados populares que declaren y califiquen la culpabilidad de los acusados; de manera

que á los funcionarios judiciales sólo se les conceda la facultad de aplicar la pena que designen las leyes preexistentes.

Que se prohíban los odiosos impuestos de alcabala y se reforme la ordenanza de aduanas marítimas y fronterizas, conforme á los preceptos constitucionales y á las diversas necesidades de nuestras costas y fronteras.

La convención tomará en cuenta estos asuntos y promoverá todo lo que conduzca al restablecimiento de los principios, al arraigo de las instituciones y al común bienestar de los habitantes de la República.

No convoco ambiciones bastardas ni quiero avivar los profundos rencores sembrados por las demasías de la administración. La insurrección nacional que ha de devolver su IMPERIO á las leyes y á la moral ultrajadas, tiene que inspirarse de nobles y patrióticos sentimientos de dignidad y justicia.

Los amantes de la Constitución y de la libertad electoral son bastante fuertes y numerosos en el país de Herrera, Gómez Farías y Ocampo, para aceptar la lucha contra los usurpadores del sufragio popular.

Que los patriotas, los sinceros constitucionalistas, los hombres del deber, presten su concurso á la causa de la libertad electoral, y el país salvará sus más caros intereses. Que los mandatarios públicos, reconociendo que sus poderes son limitados, devuelvan honradamente al pueblo elector el depósito de su confianza en los periodos legales, y la observancia estricta de la Constitución será verdadera garantía de paz. Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución.

"La Noria", Noviembre de 1871.

Porfirio Díaz

Plan de Tuxtepec

Considerando:

Que la República Mexicana está regida por un gobierno que ha hecho del abuso un sistema político, despreciando y violando la moral y las leyes, viciando á la sociedad, despreciando á las instituciones, y haciendo imposible el remedio de tantos males por la vía pacífica; que el sufragio público se ha convertido en una farsa, pues el presidente y sus amigos por todos los medios reprobados hacen llegar á los puestos públicos á los que llaman sus "Candidatos Oficiales", rechazando á todo ciudadano independiente; que de este modo y gobernando hasta sin ministros se hace la burla más cruel á la democracia que se funda en la independencia de los poderes; que la soberanía de los Estados es vulnerada repetidas veces; que el Presidente y sus favoritos destituyen á su arbitrio á los Gobernadores, entregando los Estados á sus amigos, como sucedió en Coahuila, Oaxaca, Yucatán y Nuevo León, habiéndose intentado hacer lo mismo con Jalisco; que á este Estado se le segregó para debilitarlo, el importante cantón de Tepic, el cual se ha gobernando militarmente hasta la fecha, con agravio del pacto federal y del derecho de Gentes; que sin consideración á los fueros de la humanidad se retiró á los Estados fronterizos la mezquina subvención que les servía para defensa de los indios bárbaros; que el tesoro público se dilapida en gastos de placer, sin que el Gobierno haya llegado á presentar al Congreso de la Unión la cuenta de los fondos que maneja.

Que la administración de justicia se encuentra en la mayor prostitución, pues se constituye á los Jueces de Distrito en agentes del centro para oprimir á los Estados; que el poder municipal ha desaparecido completamente pues los Ayuntamientos son simples dependientes del Gobierno para hacer las elecciones; que los protegidos del Presidente perciben tres y hasta cuatro sueldos por los empleos que sirven con agravio de la moral pública; que el despotismo del poder Ejecutivo se ha rodeado de presidiarios y asesinos que provocan, hieren y matan á los ciudadanos ameritados; que la instrucción pública se encuentra abandonada; que los fondos de esto paran en manos de los favoritos del Presidente; que la erección del Senado, obra de Lerdo de Tejada y sus favoritos, para centralizar la acción legislativa, importa el veto á todas las leyes, obra también de la misma funesta administración, no ha servido sino para extorsionar á los pueblos; que el país ha sido entregado á la Compañía Inglesa con la concesión del Ferrocarril de Veracruz y el escandaloso convenio de las tarifas, que los excesivos fletes que se cobran han estancado al comercio y á la agricultura; que con el monopolio de esta línea se ha impedido que se establezcan otras produciéndose el desequilibrio del comercio en el interior, el aniquilamiento de todos los demás puertos de la

República y la más espantosa miseria en todas partes; que el Gobierno ha otorgado á la misma Compañía con pretexto del Ferrocarril de León, el privilegio para celebrar loterías, infringiendo la Constitución; que el Presidente y sus favorecidos han pactado el reconocimiento de la enorme deuda Inglesa, mediante dos millones de pesos que se reparten por sus agencias; que ese reconocimiento, además de inmoral es injusto, porque á México nada se indemniza por perjuicios causados en la intervención.

Que parte de esa infamia, se tiene acordada la de vender tal deuda á los Estados Unidos, lo cual equivale á vender el país á la nación vecina; que no merecemos el nombre de ciudadanos mexicanos, ni siquiera el de hombres los que sigamos consistiendo el que estén al frente de la administración los que así roban nuestro porvenir y nos venden en el extranjero; que el mismo Lerdo de Tejada destruyó toda esperanza de buscar el remedio á tantos males en la paz, creando facultades extraordinarias y suspensión de garantías para hacer de las elecciones una farsa criminal.

En nombre de la sociedad ultrajada y del pueblo mexicano vilipendiado, levantamos el estandarte de la guerra contra nuestros comunes opresores, proclamando el siguiente plan:

Art. 1º. Son leyes supremas de la República, la constitución de 1857, la acta de reformas promulgada el 25 de Septiembre de 1873, y la ley de 1874.

Art. 2º. Tendrán el mismo carácter de ley suprema la No-Reelección del Presidente de la República y Gobernadores de los Estados, mientras se consigue elevar este principio al rango de reforma constitucional, por los medios legales establecidos por la Constitución.

Art. 3º. Se desconoce á D. Sebastián Lerdo de Tejada como Presidente de la República y á todos los funcionarios y empleados por él, así como los nombrados en las elecciones de Julio del año de 1875.

Art. 4º. Serán reconocidos todos los gobernadores de los Estados que se adhieran al presente plan. En donde esto no suceda se reconocerá interinamente como gobernador al que nombre el jefe de armas.

Art. 5º. Se harán elecciones para Supremos Poderes de la Unión á los dos meses de ocupada la capita de la República, en los términos que disponga la convocatoria que expedirá el Jefe del Ejecutivo, un mes después del día en que tenga lugar la ocupación con arreglo á las leyes electorales de 12 de Febrero de 1857 y 23 de Diciembre de 1872.

Al mes de verificadas las elecciones secundarias se reunirá el Congreso, y se ocupará inmediatamente de llenar las prescripciones del art. 51 de la primera de dichas leyes, á fin de que desde luego entre al ejercicio de su encargo el Presidente constitucional de la República y se instale la Corte Suprema de Justicia.

Art. 6º. El Poder Ejecutivo, sin más atribuciones que las meramente administrativas, se depositará mientras se hacen las elecciones, en el Presidente de la Suprema Corte de Justicia actual, ó en el magistrado que desempeñe sus funciones, siempre que uno ú otro en su caso, acepte en todas sus partes el presente plan, y haga conocer su aceptación por medio de la prensa, dentro de un mes, contando desde el día en que el mismo plan se publique en los periódicos de la capital. El silencio ó negativa del funcionario que rija la Suprema Corte investirá al Jefe de las armas con el carácter de Jefe del Ejecutivo.

Art. 7º. Reunido el octavo congreso constitucional, sus primeros trabajos serán la reforma constitucional de que habla el art. 2º, la que garantiza la independencia de los municipios y la ley que dé la organización política del Distrito Federal y Territorio de la Baja California.

Art. 8º. Los generales, jefes y oficiales que con oportunidad secunden el presente plan, serán reconocidos en sus empleos, grados y condecoraciones.

Campo en Palo Blanco, Marzo 21 de 1876.

*Porfirio Díaz*¹

¹ Fuente: Antonia Pekalov Yudelevich. *Porfirio Díaz durante la República restaurada*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, tesis para obtener el grado de Lic. en historia, 1971, pp.170-184.

Fuentes de investigación.

- *Diario de los debates de la Cámara de Diputados de la XIII legislatura.*

Resguardado por la Hemeroteca Nacional de México.

- Documentos Parlamentarios de la Secretaría de Fomento. 1888

Resguardado por el Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional.

- El periódico *El siglo XIX*.

En la Hemeroteca Nacional de México.

- El diario *El Monitor Republicano*.

En la Hemeroteca Nacional de México.

Bibliografía.

Annino, Antonio. (Coord.) *Historia de las elecciones en Iberoamérica en el siglo XIX*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995.

Aninno, Antonio, "El pacto y la norma. Los orígenes de la legalidad oligárquica en México". *Historias*. Núm. 5., México, INAH, enero-marzo, 1985.

Bertola, Elizabetta." Las oportunidades del poder: suplencias e interinatos políticos en la práctica del compromiso y del control electoral en el México porfirista 1876-1911", en Enrique Montalvo coord., *El águila bifronte. Poder y liberalismo en México*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1995.

Bulnes, Francisco. *El verdadero Díaz y la revolución*. México, Grijalbo, 1992

Córdova, Arnaldo. *La ideología de la revolución mexicana*. México, editorial Era, 1999.

Cosío, Villegas Daniel. *Historia moderna de México, vida política interior, segunda parte*. México, Hermes, 1977.

Emmerich, Gustavo Ernesto, "Las elecciones en México, 1808-1911: ¿Sufragio efectivo? ¿No-reelección?", en *Las elecciones en México*, México, IISUNAM-Siglo XXI Editores, 1985.

Hermet, Guy y Alain Rouquie, *¿Para que sirven las elecciones?*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

García Granados Ricardo. *Historia de México, desde la restauración de la república en 1867, hasta la caída de Porfirio Díaz*, México, Botas, 1923.

Garner, Paul. *Porfirio Díaz. Del héroe al dictador*. Traductor Luis Pérez Villanueva. México, Planeta, 2001.

Guerra, Francois Xavier. *México: del antiguo régimen a la revolución*. Traducción de Sergio Fernández. México, Fondo de Cultura Económica, 1991 2V.

Katz, Friedrich. "México: la restauración de la República y el porfiriato, 1867-1910". En Leslie Bethell Ed. *Historia de América Latina*, vol. 9. México, América Central y el Caribe, 1870-1930, Barcelona, Crítica, 1992.

López Portillo, y Rojas José. *Elevación y caída de Porfirio Díaz*. México, Librería Española, 1952.

Parra, Porfirio. *La sociología de la reforma*. México, Empresas editoriales, 1948.

Pérez de Sarmiento Marisa. *Historia de una elección: la candidatura de Olegario Molina en 1901*. Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán. 2002.

Pérez de Sarmiento Marisa. *El cultivo de las élites. Grupos económicos y políticos en Yucatán en los siglos XIX y XX*. México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 2001.

Perry, Laurens B., Juárez y Díaz. *Continuidad y ruptura en la política mexicana*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Ediciones ERA, 1996.

Prida, Ramón. *De la dictadura a la anarquía*. 2ª edición. México, Botas, 1958

Ponce, Alcocer María Eugenia. *La elección presidencial de Manuel González, 1878-1880*. México, Universidad Iberoamericana, 2000.

Medina Peña, Luis. *Invencción del sistema político mexicano*. México, Fondo de Cultura Económica, 2004.

Nieto, Macías Marcela. *Legislación electoral mexicana 1857-1988 y democracia*. México, tesis para obtener el título de Lic. en derecho Universidad Lasallista, 1989.

Rabasa, Emilio. *La Constitución y la dictadura*. México, Porrúa, 1990.

Rabasa, Emilio. *La evolución histórica de México*. México, Porrúa, 1956.

Ramírez, Rancaño Mario. *El patriarca Pérez. La Iglesia Católica Apostólica Mexicana*. México, Universidad Nacional Autónoma de México. 2006.

Sierra, Justo. *Evolución política de México*. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977.

Torre Villar, Ernesto de la, et al., *Historia documental de México*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1974.

Valades, José Cayetano. *El porfirismo: historia de un régimen*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999, 3 V.

Valenzuela, Georgette José. *Legislación electoral mexicana 1812-1921; cambios y continuidades*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.

Yudelevich, Pekalov Antonia. *Porfirio Díaz durante la República restaurada*. México, tesis para obtener el título de Lic. en historia, Universidad Nacional Autónoma de México, 1971.

Zea, Leopoldo. *El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.